Esa nueva forma de sociabilidad política se concretó fundamentalmente en la constitución de los partidos políticos modernos, es decir, electorales de masas; tanto por parte de las llamadas fuerzas políticas de “izquierda” o “izquierdistas”, es decir, de todos aquellos partidarios de cambios democráticos sustanciales y drásticos en el régimen imperante; como también por parte de las llamadas fuerzas políticas de “derecha”, o sea, los causahabientes del gomecismo o los partidarios de la conservación de ciertos rasgos de ese régimen; asumiendo con esos calificativos de “izquierda” o “derecha”, las denominaciones o autodenominaciones que se dieron a esas fuerzas durante el debate ideológico-político escenificado por ellas mismas en los mencionados años (Congreso de la República, 1983, t. VII, vol. II, Doc. N° 188).

Igualmente se organizaron los partidarios del sector oficialista; es decir, los seguidores de la política de López y Medina.

En los primeros meses de 1936, las llamadas fuerzas políticas de “izquierda” canalizaron sus acciones a través de las organizaciones de tipo gremial constituidas en esos momentos como la Asociación Nacional de Empleados (ANDE), fundada en diciembre de 1935 y la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), reorganizada en el mes de enero de 1936, ya la cual gozaba de cierto prestigio político entre las masas populares en razón de su actuación en los sucesos de 1928.

Tales acciones consistieron en la emisión o apoyo a manifiestos como el “Llamamiento al Pueblo Venezolano” elaborado por un grupo de personalidades autodenominado “La Unión Popular”, realizado el 3 de enero de 1936, solicitando la liquidación del gomecismo y la apertura definitiva de las libertades democráticas o liderando las movilizaciones populares efectuadas con iguales fines durante los meses iniciales de 1936 como las famosas “Jornadas del 14 de febrero”, que tuvieron como propósito protestar por la suspensión de las garantías constitucionales decretadas un mes antes por el gobierno de López Contreras a

consecuencia de las intensas manifestaciones populares ocurridas a raíz de la muerte de Gómez y también por el decreto de censura de la prensa emitido dos días antes de esas jornadas.

El punto culminante de esas jornadas estuvo constituido por el desarrollo de una marcha en horas de la tarde de ese 14 de febrero, en la cual participaron 40.000 personas aproximadamente, encabezadas por la FEV, exigiendo al presidente López la restitución de las garantías y la anulación del mencionado decreto sobre la prensa.

Una vez restituidas las garantías el día 21 de ese mismo mes y dado cierto viraje en las posiciones políticas sostenidas por el gobierno de López hacia las reivindicaciones democráticas, se constituyó en el seno de las llamadas fuerzas de izquierda, lo que Sosa y Lengrand (1983, p. 15), consideran “la primera experiencia de un partido político de nuevo cuño”: la Unión Nacional Republicana (UNR). Este partido se había conformado días antes a las jornadas del 14 de febrero, pero sólo pudo hacer vida política legal luego del restablecimiento de las garantías. Su consejo central estuvo integrado por personas de diversos sectores económicos y profesionales: Elías Benarroch, Miguel Acosta Saignes, Guillermo Meneses, Nicomedes Zuloaga, Enrique Tejera, Alfonso Mejías, entre otros; quienes proponían en el programa político presentado en esa oportunidad, la necesidad de la unión de todas las fuerzas vivas de la nación “para hacer efectiva la democracia” mediante el resguardo y cumplimiento de las garantías constitucionales (Suárez, 1977, t. I, p. 122).

La UNR fue uno de los partidos que integrarían el llamado “Bloque de Abril” juntamente con ORVE y el PRP; bloque organizado a fin de apoyar la instalación del Congreso Nacional el 19 de abril de 1936 y no interrumpir la evolución política iniciada en diciembre de 1935, hecho que se explicará más adelante.

Luego de la "Huelga General" de junio de 1936, convocada por ese mismo bloque de partidos con el propósito de protestar ciertas medidas tomadas por el gobierno de López (elaboración de la Ley de Orden Público o Ley Lara) para contrarrestar los desórdenes públicos, la UNR amaina un poco sus acciones dentro del mencionado bloque y se declara en documento que hace público en julio de ese año, como un "partido político que apoya las bases del Estado Tradicional que sostiene el derecho de propiedad privada y consagra la institución de la familia" y señala además su rechazo a todas las formas de intolerancia y medios de violencia (Congreso de la República, 1983, t. VII, vol. II, Doc. Nº 174, p. 219).

Para finales de 1936, no obstante mantenerse dentro de la línea de cambios democráticos, la UNR no formaría parte del llamado Partido Unico de las Izquierdas (PDN) que se trató de integrar en esos momentos. Es de observar también que algunos de sus más prominentes miembros como Enrique Tejera y Alfonso Mejías integrarían el gabinete ministerial de López en diversas oportunidades.

Igualmente al calor de las jornadas de febrero surgió también en el seno de las llamadas fuerzas políticas de "izquierda", concretamente, en los primeros días de marzo de 1936, el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE), dando a conocer un "Manifiesto-Programa" a través de la prensa en el que deseaba organizar y movilizar a "todas las fuerzas sanas del país" en el firme designio de reemplazar "El Estado personalista de los Gómez y su clientela ... por un estado nacional que ofrezca justicia, protección y eficiencia a todos los venezolanos (Suárez, 1977, t. I, p. 142).

Por esa razón se autodefinió, en las primeras de cambio, como un "movimiento" y no como un "partido político":

... un movimiento en marcha que aspira a recoger la vibración de la vida venezolana, y a dar a cada hombre y a cada grupo social su puesto de vigilancia y de combate en las luchas por el Estado moderno y por la justicia social (p. 143).

De allí, la heterogeneidad tanto ideológica como social que presentó la militancia de ORVE en sus momentos iniciales, entre cuyos miembros figuraban, según la firmas que aparecen en su Manifiesto-Programa: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni (antiguos ardistas), junto a Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, J. J., González Gorrondona, Joaquín Gabaldón Márquez, Alberto Ravell, entre otros.

Sobre la base de alcanzar “ una transformación moderna y democrática” del Estado venezolano, como metas programáticas fundamentales, los orvistas estructuraron un plan de acción resumidos en cinco puntos a saber: 1) Buscar lo que nos une y no lo que nos divide. 2) Hacer de Venezuela un Estado moderno. 3) Solucionar los problemas concretos del país en salud, asistencia social, educación, economía, transporte y comunicaciones, trabajo y vivienda. 4) Colocar al Ejército al servicio de la Nación y 5) Establecimiento de la carrera administrativa en todos los servicios públicos (pp. 143-144).

En la actuación política de ORVE a lo largo de los siguientes meses de 1936, se pueden distinguir dos momentos: uno, desde su fundación en marzo hasta la celebración de la “Huelga General” de junio de ese año y otro, a partir de este acontecimiento hasta su ilegalización en febrero de 1937. En el primer momento, sus integrantes mantuvieron una actitud moderada y hasta de colaboración con el gobierno de López, por creer, como afirmaría Jóvito Villalba, en discurso pronunciado en el Mitin celebrado por esta organización el 2 de marzo de 1936, que “el programa de ORVE y el del Gobierno coinciden y esto nos posibilita a una acción de colaboración con la actual administración pública, una acción de cooperación sin que seamos un organismo oficial ligado al gobierno” (Congreso de la República, 1983, t. VII, vol. I, Doc. Nº 51, p. 311).

En virtud de esa actitud “colaboracionista” como sostiene Battaglini (1993, p. 97), varios de sus miembros como Alberto Adriani y otros allegados como

Rómulo Gallegos ingresaron al gabinete ministerial de López; sin que por ello, ORVE, como organización política de izquierda, dejara de hacer oposición a este gobierno y fue así como formaría parte del llamado "Bloque de Abril" con UNR y el PRP y propiciaría también junto con estos partidos la Huelga General de junio de 1936.

A raíz de esa huelga en la que ORVE desempeñó un papel determinante, esta organización sufriría una especie de "purificación ideológica" en sus filas; algunos de sus miembros como Picón Salas y Adriani entre otros, renunciaron por no estar de acuerdo con el giro político asumido en esos momentos por esta agrupación. En julio de 1936, ORVE reestructuraron su directiva con Rómulo Betancourt como secretario general de la organización, autoproclamándose como "Partido Político", radicalizando sus posturas y acciones ante el gobierno de López y presentando además en esa oportunidad un nuevo programa político. Consecuente con esta nueva actitud, a fines de 1936, formaría parte del intento de constituir el Partido Unico de las Izquierdas: el PDN.

Bajo el influjo también de las jornadas de febrero de 1936, surgiría en el sector de las fuerzas políticas de izquierda otro partido: el Partido Republicano Progresista (PRP). Se trató de una organización política de inspiración ideológica distinta a las anteriores: gran parte de sus afiliados comulgaban con las ideas comunistas, pero no la manifestaban públicamente por estar prohibida su expresión de acuerdo a la Constitución de 1931 vigente todavía en esos momentos. Entre sus fundadores se contaron Rodolfo Quintero, Salvador de La Plaza, Gustavo Machado, Miguel Otero Silva, Carlos Irazábal (Magallanes, 1983).

El PRP a diferencia de ORVE, se declaró desde un primer momento como partido político y no como un movimiento; un partido que al aspirar " ... ser intérprete fiel de la mayoría del pueblo de Venezuela, se propone luchar por hacer efectivos los anhelos de las masas laboriosas de nuestro pueblo", según reza en su "proyecto de programa". Y a renglón seguido proponía una serie de medidas

democráticas: sufragio universal, soberanía popular, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión entre otros; **económicas:** revisión de las concesiones petroleras, parcelación de los latifundios, fomento de la industria nacional, entre otras; **fiscales:** impuesto al capital, persecución del peculado, entre otras; **laborales:** jornadas de ocho horas, seguro social, igualdad de salarios para hombres y mujeres, entre otras; y finalmente **culturales:** desarrollo de la educación pública, desarrollo de campañas de desanalfabetización entre otras (Suárez, 1977, t. I, pp. 135-141).

En el proyecto de programa del PRP, se contemplaba la proposición de establecer alianzas con otras organizaciones políticas de izquierda para "... aunar esfuerzos en la lucha por el triunfo de la democracia y por la destrucción completa del gomecismo" (p. 141). Sobre la base de este postulado, este partido formaría parte del llamado Bloque de Abril y también participaría en el intento de constituir el Partido Unico de las Izquierdas.

Pero no sólo a nivel de la capital de la República, las llamadas fuerzas de izquierda se organizarían, sino que también lo hicieron en el interior del país; cabe destacar, en este sentido, la formación en Maracaibo del Bloque Nacional Democrático (BND). Se trató de una agrupación muy afín a ORVE con el que mantuvo vínculos de pensamiento y acción como se evidencia en su programa político (p. 148).

En el desarrollo organizativo de las fuerzas políticas de izquierda a lo largo de 1936, sobresalieron dos acontecimientos de importancia: la constitución del llamado "Bloque de Abril" y el intento de conformar el Partido Unico de las Izquierdas o PDN.

Para el mes de abril de ese año, se tenía previsto la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional cuya composición política había sido heredada de Gómez. Ante esa circunstancia se había configurado dos matrices

opuestas de opinión en el ambiente político de entonces: una, partidaria de la reunión del Congreso con la correlación de fuerzas antes dicha con el fin de mantener “el Hilo Constitucional” y evitar así cualquier perturbación del orden que condujera a la anarquía y otra segunda opinión, según la cual, el Congreso no debía reunirse en esas condiciones, sino que debía convocarse a elecciones para integrar una asamblea constituyente.

Prevalció, sin embargo, la primera y a ella se sumaron las organizaciones de izquierda existentes para entonces: UNR, ORVE y el PRP que se integraron en el llamado “Bloque de Abril”, el cual apoyó en primera instancia la reunión del Congreso por considerarlo un factor indispensable para que “la evolución política que ha comenzado en el país, se realice dentro de la más estricta legalidad, a fin de evitarle a la Nación conmociones que pongan en peligro la Democracia”, según manifestaron esos mismos partidos en el acta constitutiva de ese bloque (p. 154).

Se trató, sin embargo, de un apoyo condicionado a que el propio Congreso decretara su propia disolución a los días siguientes de instalado y convocara a elecciones generales para integrar otro nuevo, tal como dejaron constancia en la mencionada acta constitutiva de ese bloque de partidos. En virtud de que la tan ansiada disolución del Congreso no se produjo y ante la inminente aprobación de la Ley de Orden Público o “ Ley Lara” propuesta por el gobierno de López para hacer frente a la creciente oposición de izquierda, los partidos conformantes del Bloque de Abril llamaron a una huelga general el 9 de junio de 1936, la cual se cumpliría con relativo éxito según algunos (Hermoso, 1991 y Moleiro, 1992).

Tal acontecimiento provocaría en el segundo semestre de 1936, un nuevo viraje en la dinámica política desarrollada por el gobierno de López, pero esta vez hacia posturas más conservadoras y de derecha. Obligados por esta circunstancia, los partidos y organizaciones de izquierda se vieron en la necesidad de unir esfuerzos y constituir un solo bloque de oposición al gobierno de López y a los grupos que los respaldaban. Surgiendo, de este modo, el

Partido Democrático Nacional (PDN), el cual se autoproclamó "Partido Unico de las Izquierdas". En su conformación estuvieron ORVE, el PRP, la Federación de Estudiantes de Venezuela (Organización Política), fundada como partido por Jóvito Villalba, luego de su separación de la Federación de Estudiantes de Venezuela (Organización Estudiantil) y estuvieron además el BND de Maracaibo, el Frente Obrero y el Frente Nacional de Trabajadores (Mijares, 1980).

En el mes de octubre de 1936, el PDN presentó un programa de acción donde se expuso como objetivo fundamental de las organizaciones que lo integran: "el implantar un régimen auténticamente democrático que garantice la independencia y libertad del pueblo " y reiterando además en este documento, las principales consignas y reivindicaciones esgrimidas desde meses atrás por estas mismas organizaciones (en Suárez, 1977, t. I, p. 182).

Sin embargo, la legalización del PDN no fue aceptada por el gobierno aduciendo para tomar esa decisión la presencia de individuos con ideas comunistas en su militancia.

Entre diciembre de 1936 y enero de 1937, se desarrolló la Primera Huelga Petrolera. La participación en ella de connotados dirigentes pertenecientes a los partidos que integraban el PDN, determinó que el gobierno de López revocara la autorización para el funcionamiento legal de esos partidos y en el mes de marzo del segundo de los años citados, decretaría la expulsión del país por el término de un año a cuarenta y siete de sus principales líderes (Moleiro, 1992).

No obstante esa situación, las fuerzas de izquierda continuaron actuando de modo ilegal y clandestinamente y persistiendo en nuevos intentos cohesionadores como la constitución del Partido Demócrata Venezolano (PDV) a fines de 1937 por parte del General José Rafael Gabaldón; partido que no fue reconocido alegándose que sus integrantes pertenecían a los partidos ilegalizados (Suárez, 1997, t. I, p. 182).

Pero no solamente las llamadas fuerzas políticas de izquierda se organizaron en partidos políticos en tiempos del gobierno de López, también hicieron lo propio las fuerzas políticas consideradas de derecha o conservadoras. Según testimonio de un testigo de excepción de esos acontecimientos, Díaz Sánchez (1983), la primera agrupación surgida en el seno de estas fuerzas fue el partido Acción Nacional que se definió como “una agrupación de hombres responsables que asumen hoy la actitud digna y fuerte de bloque dispuesto a luchar por la nueva patria y contra todo lo que signifique extremismo, marxismo, disolución y relajación social”, según expresaran en el Manifiesto y Programa presentado a la opinión pública de entonces. Fueron sus principales miembros: Juan José Mendoza, José Herrera Uslar, Bernardo Guzmán Blanco, Martín Vegas, entre otros (p. 145).

En los primeros días del mes de marzo de 1936, se constituyó el Bloque Unión, siendo su objetivo el “unir en una sociedad a todos los católicos que lo sean por la integridad y la moralidad de su conducta, para sostener y defender los fueros de la religión, de la moral y de la justicia en nuestra patria” (Magallanes, 1983, p. 297).

También por esos meses el Bloque de Avance Nacional o de Acción Nacional (BAN), el cual se consideró a sí mismo como “un puñado de hombres agrupados en torno a un ideal de Patria Grande...” (Suárez, 1977, p. 136). El acta constitutiva de este partido estuvo firmada por el Capitán Luis Rafael Pimentel, quien era su director ejecutivo; Federico Wulff, Alfredo Zuloaga Blanco, entre otros. Según Díaz Sánchez (1983), a este partido se le unió Acción Nacional y mantuvo una propaganda anticomunista con “intensidad y fervor que se dijo entonces que su misión principal era la formación de una falange de choque” (p.57).

En el mes de mayo de ese mismo año de 1936, un grupo de estudiantes, encabezados por Rafael Caldera, decidió separarse de la Federación De

Estudiantes de Venezuela (FEV), por no compartir las posiciones políticas asumidas por esta organización en esos momentos y, en consecuencia, no responder a lo que “debe ser fisonomía del estudiantado venezolano”, de acuerdo al documento de renuncia dado a la prensa de entonces para su publicación (Congreso de la República, 1983, t. VII, vol. I, Doc. N° 87, pp. 511).

En los días siguientes a esa renuncia, esos mismos estudiantes fundaron la “Unión Nacional Estudiantil”, que se definía como una asociación y no un partido político, integrada fundamentalmente por liceístas y universitarios de tendencia católica que se autocalificaban de apolíticos y defensores de las “legítimas aspiraciones del estudiantado venezolano, sin distingos de credos políticos ni religiosos”, según su acta constitutiva citada en Luque (1986, p 74). Su núcleo directivo central estuvo constituido por Rafael Caldera, Pedro José Lara Peña, Eduardo López de Ceballos, Francisco Alfonso Ravard, Gustavo Ponte y Enrique Monbrum.

En octubre de 1938, un grupo de uneístas organizaron con fines estrictamente electorales un movimiento llamado Acción Electoral y luego, en diciembre de 1939, con propósitos más partidistas al Movimiento de Acción Nacionalista (MAN), presentando un programa político cuyos puntos básicos comprenden: defender la tradición legítima, sostener el concepto de justicia social, propugnar la unidad política venezolana, defensa de la Religión Católica y los fueros de la Iglesia de Cristo, fomento de las fuerzas económicas dentro de una subordinación a los intereses espirituales. Declaran además su rechazo hacia las corrientes que pretendan implantar los sistemas liberal, fascista, nazista, comunista o socialista en Venezuela (Suárez, 1977, t. I, pp. 275-277).

También por esos meses de 1936, esas fuerzas de derecha intentaron revivir algunas viejas organizaciones políticas del siglo XIX: el Gran Partido Liberal y el Partido Liberal Amarillo Histórico. De acuerdo a Luque (1986), el intento por reconstruir al primero se dio a partir del marzo; no obstante, se

constituyó definitivamente en octubre de ese año, exponiendo un programa político de corte liberal. En cuanto al Partido Liberal Amarillo Histórico, el mismo quedó constituido en el mes de junio de ese mismo año.

Es de importancia destacar la formación de la Liga de Defensa Nacional Anticomunista en el mes de septiembre de 1936. Se trató de una especie de movimiento político constituido a petición de López Contreras, con el propósito de unificar a las fuerzas de derechas a semejanza del PDN o Partido Unico de las Izquierdas, siendo su fin primordial “defender la nación venezolana de la propaganda del comunismo y del marxismo”, según se expone en sus estatutos. La junta directiva de esta organización estuvo presidida por el General Juan Bautista Araujo; como primero y segundo vicepresidentes, Francisco Arroyo Parejo y José Ramón Ayala, respectivamente y como vocal Rafael Caldera (Magallanes, 1983, p. 300).

También en ese mes de septiembre se fundó otro movimiento político con matices conservadores y de derecha: el Partido Nacionalista o PAR-NAC, en el seno del cual tuvo bastante influencia uno de los ministros de López, Tomás Pacanins. En el programa de este partido se proclamó como “axioma político que la mejor organización es el de la República-democrática cuya acción se fundamenta en el principio de Patria y la doctrina del nacionalismo” (Suárez, 1977, t. I, p. 176).

Otra organización política que se formó por esos meses de 1936, cuyos integrantes estuvieron muy vinculados a López, fue el Partido Agrario Nacional (PAN), constituido por Rodolfo Rojas, Manuel Egaña, Pastor Oropeza, Arturo Uslar Pietri, Ramón Díaz Sánchez, entre otros. Se autoproclamaron “nacionalistas, agraristas y modernizadores” (Magallanes, 1983, p. 305).

Por parte del sector oficialista como tal, cabe destacar la constitución de las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas o simplemente Cívicas Bolivarianas

auspiciadas por el propio López Contreras para que sirvieran de apoyo a las acciones e intereses del gobierno y participar en las diferentes contiendas electorales.

Durante el gobierno del General Isaías Medina Angarita (1941-45), se produjo cierta flexibilidad en el ambiente político venezolano, lo cual permitió la legalización definitiva de los partidos políticos, siendo Acción Democrática el primero en ser autorizado el 29 de julio de 1941, pero entró a actuar meses más tarde con la celebración de una asamblea pública el 13 de septiembre de ese año. En realidad, este partido no era otra cosa que el antiguo sector del PDN ilegal dirigido por Rómulo Betancourt que actuaba en la clandestinidad desde 1937 y que en estos momentos fue legalizado. El programa presentado en esa oportunidad no hacía otra cosa que reiterar algunos de los principios ya expuestos en el programa del PDN ilegal (1939): efectividad de las garantías constitucionales, democratización de los órganos del Estado, establecimiento del sufragio universal y directo, igualdad política entre el hombre y la mujer, derecho a la sindicalización, derecho del Estado de revisar los tratados lesivos al país, fomento de la producción industrial y agrícola y favorecimiento de las inversiones como factor coadyuvante, entre otras cosas (Cartay, 1983).

En abril de 1942, los antiguos uneístas e integrantes del Movimiento Acción Nacionalista (MAN), fundaron con intenciones manifiestas de partido a Acción Nacional, el cual fue legalizado el 2 de junio del mencionado. En el programa de este partido, los uneístas confirmaron una vez más los postulados contemplados en el programa del MAN (Suárez, 1977, t. II, pp. 41 y ss).

Como resultado del llamado realizado por el presidente Medina en mayo de 1942, con el propósito de organizar una agrupación política que defendiera y perpetuara los ideales progresistas democráticos que perseguía su gobierno; se constituyó un año después, concretamente, el 26 de mayo de 1943, un partido político que inicialmente se denominó Partidarios de la Política del Gobierno

(PPG). En la asamblea constitutiva celebrada al respecto, el propio presidente Medina reafirma ese propósito en los términos siguientes:

Yo he propugnado la formación de un partido político desde la Presidencia de la República, y quiero por eso aclarar ciertos conceptos. Primero que todo, no busco ningún privilegio personal ni para mí ni para los hombres que me rodean en el Gobierno, sino busco el concurso y la cooperación de las buenas voluntades, para que un gobierno que adecente la República, que dignifique al ciudadano, se perpetúe, no en personas, sino en los sistemas y en los métodos (p. 47).

Para septiembre de ese mismo año, se celebró la II Asamblea del PPG en la cual se fijaron los objetivos del partido y se configuró su plataforma política. En esta asamblea se cambió el nombre de PPG por Partido Democrático Venezolano (PDV) y se hizo público un manifiesto cuyo ideario básico puede resumirse en la realización progresiva de una reforma democrática desde arriba, desde el Estado: "Somos un partido para el pueblo ..., encuadrado doctrinariamente dentro de la concepción de la democracia progresista" – afirmaban en ese manifiesto –, al tiempo que establecían las consignas siguientes: a nivel político: perfeccionamiento del sistema y prácticas electorales con miras al establecimiento del voto directo; luchar por la realización integral de las ideas democráticas; ir directamente contra el caudillismo personalista y elementos disociadores; luchar por la capacitación de la mujer y su incorporación integral a la vida política, entre otras. A nivel económico: fomento de una economía sana, propia y provisorio; realización de una reforma agraria; defensa de la justa participación del Estado en la explotación de las riquezas del subsuelo patrio, entre otras. A nivel social: luchar por el bienestar social de todos los venezolanos; protección de la familia, del niño y la mujer; implantación del seguro social obligatorio y desarrollo de una efectiva labor educativa; entre otras (pp. 53 y ss).

En marzo de 1944, se fundó Unión Popular Venezolana (UPV); partido éste que resultó de la fusión de diversas organizaciones políticas como la Unión Municipal del Distrito Federal, la Liga de Unificación Zuliana y las agrupaciones del partido Unión Popular que funcionaban en varios estados del país: Lara, Táchira,

Miranda, Trujillo, Carabobo, Anzoátegui, Monagas y Aragua; organizaciones a través de las cuales operaban desde 1941 los militantes del Partido Comunista ilegal. Al igual que como cualquiera de los partidos anteriores, la UPV presentó su programa político, cuyos objetivos pretendían ser "específicamente democrático-liberales": implantación del sufragio universal, elección directa del Presidente de la República, reforma agraria para la repartición de la tierra a los campesinos, igual salario para hombres y mujeres, seguro social obligatorio, construcción de refinerías en el país, entre otros (pp. 60 y ss).

Luego de la reforma constitucional del famoso Inciso VI del artículo 32 de la Constitución Nacional vigente que prohibía la adhesión a la doctrina comunista, el 9 de octubre de 1945, se legalizó el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

De esas fuerzas sociales y políticas emergerían los dos proyectos modernizadores sobre los cuales se ha buscado estructurar la dinámica socio-política venezolana.

III.- EI DEBATE POLITICO SOBRE LA MODERNIZACION (1936-45)

1.- Los grupos en pugna y sus proyectos modernizadores

Como bien dejó asentado un periodista de entonces, Luis Barrios Cruz, puede afirmarse que a la muerte de Gómez, las fuerzas sociales y políticas existentes en la sociedad venezolana se alineaban en dos grandes grupos:

Al desaparecer el presidente Gómez - diría -, inmediatamente se perfilaron, se destacaron, se presentaron de cuerpo entero dos corrientes como era natural que sucediera, en la vida pública del país, de acuerdo con las circunstancias en que éste se hallaba. La incontenible corriente de oposición a todo cuanto oliera a antiguo régimen, y la que es oportuno llamar, de una vez, conservadora. La fecunda corriente que exige renovación y aquella que, por múltiples razones particulares, tiende a mantenerse dentro del cauce antiguo (Congreso de la República, 1983, t. I, Vol. I, Doc. N° 5, p. 127).

Esos dos grandes grupos de intereses opuestos y hasta irreconciliables, no fueron otros que el bloque social dominante o gomecista por un lado y por otro, el bloque popular emergente o demócrata. Empero, las fuerzas aglutinadas en ambos bloques no compartían posiciones o criterios homogéneos con respecto a la reorganización social y política del país, que surgió como imperiosa necesidad luego de la muerte de Gómez.

En ese sentido, el primer bloque o de los gomecistas se encontró dividido en dos sectores: uno, partidario de la continuación del régimen anterior, sin producir modificaciones algunas en él ni en la sociedad venezolana. Se trató, por consiguiente, de un sector impermeable y opuesto a cualquier iniciativa de transformación del orden existente; sus aspiraciones pueden resumirse en el mantenimiento del caudillismo personalista con sus consabidos métodos de terror como política y en la defensa de los intereses económicos creados durante el mandato de Gómez. Este sector, de acuerdo al lenguaje político utilizado en esos años, recibió varios calificativos: "elementos más agresivos del gomecismo",

según "El Llamamiento" que efectuó la organización denominada Unión Popular en enero de 1936; "conservadores" como los denominó el citado periodista Barrios Cruz o "extrema derecha" calificativo con que los endilgó el partido Unión Nacional Republicana (UNR) en artículo publicado en 1936 (Congreso de la República, 1983, t. VII, Vol. I, Doc. N° 6 y vol. II, Doc. N° 231).

El otro sector, aspiraba imprimirle ciertos aires de flexibilidad al régimen a través de un proceso de renovación que comprendiera cambios lentos y paulatinos en sus aspectos económicos, sociales y políticos que condujera en cierto modo a lo que considera Battaglini (1993) " la sustitución de la dictadura militar personalista por una forma de ejercicio consensual y legítima del poder", sin dejar el control de este último (p.73). Se puede afirmar, que este sector era partidario de cierto ablandamiento de la dictadura y de la eliminación de sus rasgos de terror y absolutismo.

Valga en apoyo a esa diferenciación del bloque social dominante o gomecista la siguiente cita *in extenso*, de un testigo de excepción de los acontecimientos ocurridos en esos momentos:

Desde que López Contreras se encargó de la Presidencia de la República, se pusieron de manifiesto las rivalidades de dos facciones gobernantes: los viejos andinos tachiristas y los neogomecistas de López Contreras, sedicentes demócratas.

Los primeros aspiraban a continuar gobernando por medio del terror más desenfrenado, tal como lo había hecho Juan Vicente Gómez. Capitaneados por el tenebroso Eustoquio Gómez, contaban con Rafael María Velasco, Elías Sayago, Santos Matute Gómez, Pedro Manuel Arcaya, José Ignacio Cárdena y, en general, con los parientes del tirano desaparecido.

Los neogomecistas, moderados, conducidos por López Contreras, aspiraban a una dictadura con apariencias legales, esto es, basada en una legislación antidemocrática y represiva, pero sin los conocidos métodos de terror. En este grupo actuaban caudillos procedentes de otras regiones, como León Jurado y Pérez Soto; algunos tachirenses, como Félix Galavis. Podría decirse que los "tachiristas" aspiraban a una tiranía personalista y absoluta, al margen de toda ley, colocada por encima de las clases poseedoras. Como de cierto modo lo había hecho Gómez; en tanto que los moderados querían una dictadura de los más prominentes de aquéllas, ejercida en forma alternativa y apoyándose en leyes represivas (Fuenmayor, 1979, p. 121).

La pugnacidad entre esos dos sectores del bloque dominante o gomecista databa desde unos años antes de la muerte de Gómez, cuando, en razón de la enfermedad que éste padecía, se ventilaron los posibles sucesores. No obstante en virtud del llamado "Pacto de Caballeros" celebrado entre esos sectores a los días siguientes de la muerte de Gómez, López Contreras fue seleccionado como Presidente de la República, con lo cual, se puede afirmar, que la situación se inclinaba hacia el sector moderado del gomecismo, condicionado, sin embargo, por el sector conservador.

Esa situación cambió a raíz de los acontecimientos de febrero de 1936 cuando se produjo la ruptura de ese pacto y el sector moderado del gomecismo presionado por las nuevas fuerzas sociales emergentes participantes en esos acontecimientos, decidió llevar a cabo un proceso progresivo de renovación democrática de la sociedad venezolana, cuyas formulaciones iniciales, se concretaron en el "Programa de Febrero", proceso éste que orientó la estrategia económica, social y política de los gobiernos postgomecistas de López y Medina y que constituyó el proyecto modernizador presentado por estos gobiernos.

En cuanto al bloque que aglutinó a las fuerzas políticas democráticas emergentes en Venezuela a la muerte de Gómez; es decir, el bloque popular o demócrata, tales fuerzas compartían manifiestamente la liquidación del gomecismo como sistema político y aspiraban a su transformación en un orden real y efectivamente democrático; pero se hallaban – al igual que el bloque gomecista - divididos en dos sectores. Un primer sector partidario de un proceso de reorganización o modernización de la sociedad, en el cual la prioridad estaría centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de índole económica y social sobre los aspectos políticos. Para este sector, la desfase económica-social en la que se encontraba la sociedad venezolana para esos momentos constituía el problema básico a atacar; por ello, las fuerzas que los integraban se mostraban inclinadas en lo político, en que el tránsito del "Viejo orden dictatorial y personalista" al "nuevo orden democrático" se produjera progresivamente

mediante la incorporación gradual del pueblo al ejercicio de sus derechos políticos y sociales (Battaglini, 1993, p. 96).

A ese primer sector se le puede calificar de demócratas moderados o de “izquierda moderada”, según la denominación aportada por el lenguaje político empleado en esos años treinta del siglo pasado y ubicarse dentro de él a personajes como Mariano Picón Salas, Alberto Smith, Alberto Adriani, Nestor Luis Pérez, Enrique Tejera, Arturo Uslar Pietri, entre otros (Segnini, 1991).

Frente a ellos, un segundo sector aspiró a reorganizar o modernizar la sociedad venezolana valorando por igual los aspectos económicos, sociales y políticos, defendiendo la incorporación abierta y decidida de las masas populares en esa reorganización como agentes directos de la misma a través de la instauración real y efectiva de un orden democrático a establecerse de manera inmediata y no gradual como propiciaba el sector anterior.

Se trataba de un sector de composición ideológica bastante heterogénea que comprendió a gran parte de los integrantes de la llamada Generación del 28, principalmente, a los conformantes del grupo ARDI de 1931, quienes habían regresado al país y también estuvo constituido por connotados marxistas. A este sector, se le puede denominar demócratas radicales o de “extrema izquierda”, según los calificativos dados en el lenguaje político de esos años treinta del siglo pasado (Véase Congreso de la República, 1983, t. VII, vol. I, Doc. N° 231).

Luego de los acontecimientos de febrero de 1936, el sector de los gomecistas moderados en funciones de gobierno presentó lo que puede entenderse como un proyecto de modernización de la sociedad venezolana, cuyas formulaciones iniciales, como se ha dicho, estuvieron en el llamado Programa de Febrero y en otro documento denominado Plan Trienal, elaborados ambos bajo el gobierno de López y que orientarían la estrategia modernizadora de la sociedad venezolana implementada tanto por este gobierno como por el de Medina

Angarita. Este proyecto modernizador sería apuntalado y apoyado básicamente por las fuerzas demócratas moderadas en virtud de que sus lineamientos coincidían en alcanzar progresivamente la transformación democrática de la sociedad venezolana; de allí, el carácter “colaboracionista” que tuvo este sector con el desarrollo de ese proyecto (Battaglini, 1993, p. 96).

Por su parte, en el seno del sector de las llamadas fuerzas democráticas radicales, se fue perfilando también otra propuesta modernizadora de la sociedad venezolana, la cual se concretó en los pronunciamientos y consignas de los movimientos y partidos políticos que estas fuerzas conformaron a partir de 1936. Especialmente cabe destacar las organizadas por los ex ardistas, quienes para el año 1939, contaban ya con la estructuración bastante acabada de un proyecto modernizador alternativo al anterior, es decir, al proyecto lopecista-medinista.

Como bien sostienen Sosa (1989), España (1989) y Avendaño (1996), ambos proyectos convergen en naturaleza y objetivos: lograr la modernización de la sociedad venezolana en sus aspectos económicos, sociales y políticos. En este sentido, se persigue la transformación capitalista de la economía venezolana mediante el desarrollo de una sólida base industrial, el establecimiento de una estratificación social acorde con esa transformación capitalista y la instauración de un orden democrático-representativo. Es más, coinciden también en el papel a desempeñar por el Estado venezolano como promotor principal en ese proceso modernizador mediante el uso; es decir, el destino que debe dársele a los ingresos petroleros: su inversión en áreas productivas.

Sin embargo, ambos proyectos divergen en la forma de realizar la modernización; es decir, en la estrategia para vehicularla en cuanto al establecimiento de prioridades en los cursos de la acción económica, social y política a implementarse como también en los sujetos o agentes que debían emprenderla. En otras palabras, la divergencia se produce fundamentalmente ,

como señala Avendaño (1996), " en torno al cómo y quiénes" realizan la modernización (p.115).

En el caso del proyecto modernizador de los gobiernos de López y Medina el sujeto de la modernización estuvo constituido por la élite gobernante encargada de liderar la transformación enfatizando en el aspecto económico, luego en el social y finalmente en lo político de la misma. Se trató de un proyecto en el cual se excluía la base popular; el pueblo era considerado tan sólo como beneficiario y no como protagonista de la modernización. De allí, el calificativo de "modernización desde las élites" con el cual algunos lo han identificado (España, 1989, p. 87).

Por plantearse en ese proyecto la democracia como meta a alcanzar luego de un proceso de maduración política del pueblo que lo capacitara para el ejercicio de sus derechos, lo cual conducía en la práctica al establecimiento de un orden de libertades democráticas limitadas de y para uso de minorías con exclusión, por consiguiente, de las masas populares, denominaremos a ese proyecto modernizador: Democracia representativa restringida (elitista)

En el caso del proyecto surgido en el seno de las fuerzas democráticas radicales, se planteaba en él, la imprescindible necesidad de la articulación de las masas populares como sujetos directos para realizar la modernización, la cual debía emprenderse de manera simultánea y paralela en los aspectos económicos, sociales y políticos de la sociedad, sin que hubiere el desarrollo previo de uno de estos aspectos como condición de los otros. Por ese papel a desempeñar por las masas populares en el proceso transformador, asignado en este proyecto es por lo que algunos lo han calificado de "modernización populista" (p. 90).

Empero, por plantearse en ese proyecto la democracia como un orden real y efectivo a alcanzar de manera inmediata que permitiera la incorporación del pueblo a través del sufragio universal como única vía legítima de acceso al poder

y a su ejercicio, denominaremos a este proyecto modernizador: Democracia representativa ampliada (populista).

Veamos a continuación la caracterización de las principales propuestas en sus aspectos económicos, sociales y políticos de esos dos proyectos modernizadores.

1.1.- La Democracia representativa restringida (elitista)

Los principales lineamientos y directrices de este proyecto modernizador se encuentran en los mencionados Programa de Febrero de 1936 y el Plan Trienal de 1938, documentos elaborados - como se ha dicho- bajo el gobierno de López Contreras y en los cuales se esbozan esos lineamientos, que fueron seguidos luego por Medina, tal como este último presidente expuso en 1942 en su "Orientación Administrativa", especie de plan de trabajo sobre el cual fundamentó su acción de gobierno.

1.1.1.- Aspectos económicos

Como ha quedado indicado, el proyecto de modernización presentado por los gobiernos de López y Medina, aspiraba a alcanzar la transformación capitalista de la sociedad venezolana mediante la creación y consolidación de los elementos y condiciones propias que permitieran la construcción de una economía de libre mercado, tales como: la formación de capital con miras a la inversión, el establecimiento de la relación capital-trabajo como factor esencial para el desarrollo económico, la creación de un mercado interno como incentivo fundamental en el incremento de un proceso de industrialización expansiva y la instauración de una estratificación social sobre la base de la propiedad de los medios de producción. Asumiendo como estrategia para la realización efectiva de esa transformación, la inversión de la renta petrolera por parte del Estado

venezolano en áreas productivas como base inicial del desarrollo económico perseguido.

Las medidas y orientaciones económicas contempladas en el Programa de Febrero de 1936 y en el Plan Trienal de 1938 - documentos elaborados durante el gobierno de López -, así como también los lineamientos económicos contenidos en la Orientación Administrativa presentada por el presidente Medina en enero de 1942, no hacen sino revelar esa intencionalidad de transformar de un modo capitalista la economía venezolana a través de la creación de las condiciones y elementos acordes con ese orden económico.

Así , en el Programa de Febrero se propusieron medidas que tendían al desarrollo de una política económica por parte de esos gobiernos con esa intencionalidad y cuyos puntos esenciales pueden resumirse en los siguientes:

1) Fomento de la producción agrícola y pecuaria con miras no sólo a la satisfacción del consumo interno, sino también para la exportación mediante el desarrollo de un ambicioso plan integral que comprendería la construcción de caminos, carreteras y vías de penetración agrícolas; sistemas de irrigación; otorgamientos de créditos para la agricultura, ganadería y la pesca; protección y asistencia técnica del campesinado; investigación y estudio para la introducción de nuevos cultivos como de nuevos métodos de cría; catastro de las tierras baldías a fin de formular una política de ventas y redistribución de las mismas, como también la realización de una reforma agraria, entre otras. (Suárez, 1977, t. I, pp. 123 y ss).

2) Promoción del desarrollo industrial del país con el doble propósito de ampliar el capital y el trabajo tanto como evitar la exorbitante importación de productos extranjeros para satisfacer el consumo nacional y para ello se aplicarían medidas como el otorgamiento de créditos industriales , la concesión de facilidades para la importación de maquinarias industriales y el estudio detallado

para la instalación de aquellas industrias necesarias para el desarrollo económico nacional.

3) Constitución de un amplio mercado de consumo interno como base y condición para el desarrollo económico del país y para ello había enfrentar dos grandes problemas que para entonces aquejaban a la población venezolana: su dispersión y aislamiento como sus condiciones sanitarias. En este sentido, en el Programa se proponían medidas para la dotación del país de un amplio sistema de vías de comunicación que permitieran el acercamiento de las distintas regiones del país y la implementación de programas de higiene pública y asistencia social a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

4) Implementación de una política fiscal por parte del Estado que favorezca "el desarrollo de las energías privadas y de encontrar su prosperidad en el aumento de la riqueza imponible" a través de: la puesta en marcha de acciones y medidas que conduzcan a la reformulación de la legislación arancelaria, a la reforma del sistema tributario, al perfeccionamiento de los sistemas de fiscalización de los ingresos del Estado, a la reorganización de la banca nacional para que responda mejor a las necesidades del comercio según los esquemas del nuevo orden económico.

5) Desarrollo de una política comercial que coloque al país en igualdad de condiciones con los otros países del mundo capitalista a través de la aplicación de medidas tales como: la revisión de los impuestos de importación y exportación, la protección, la reducción del impuesto aduanero sobre artículos de primera necesidad y el aumento de este impuesto sobre aquellos considerados suntuarios, la celebración de convenios bi y multilaterales ajustados a las nuevas condiciones del comercio internacional, entre otras.

6) Elaboración de una legislación que proteja los derechos del patrono para el ejercicio libre, pacífico y remunerativo de sus actividades y a su vez ofrezca

justicia económica y social al obrero, partes imprescindibles en una finalidad común: la creación de la mayor suma de riqueza pública y bienestar individual.

Las medidas y orientaciones contenidas en el Plan Trienal presentado por López a comienzos de 1938, no hacen sino continuar esos lineamientos de la política económica esbozada en el Programa de Febrero y cuya intencionalidad, como se ha dicho, era la transformación capitalista de la economía venezolana. En este sentido, con tales medidas se reiterarían los mismos puntos que integraron esa política: fomento de la agricultura y la cría para satisfacer la demandas del mercado interno y la exportación; desarrollo del potencial industrial del país con la implantación de aquellas industrias que concurren a ensanchar el capital y el trabajo y a cubrir el incipiente mercado nacional; consolidación de este último; elaboración de una adecuada política fiscal promotora de las inversiones privadas; configuración de una política comercial también favorecedora del mercado y la formación de una legislación protectora por igual de los derechos del patrono y del obrero (pp. 197 y ss).

La política económica desarrollada durante el gobierno de Medina también se adscribió a esa intencionalidad de transformar de un modo capitalista a la economía venezolana y cuyos lineamientos básicos se establecieron en el citado Programa de Febrero y en el Plan Trienal elaborados por López Contreras como hemos visto. Es más, el propio Medina, se haría partidario de la continuación de esa política y así lo declaró en su alocución inaugural como presidente de la República el 5 de mayo de 1941:

El Programa de Febrero fue promesa cumplida en sus puntos fundamentales por el Gobierno de mi ilustre antecesor. Tan vasto y concreto plan de acción habrá de servirme de fundamento para la gestión administrativa que me toca desarrollar, llevando a la práctica lo que aún no se ha realizado, ampliando y perfeccionando lo hecho hasta el presente y tratando de crear nuevas proyecciones de acuerdo con las necesidades del Estado moderno (Suárez, 1977, t. II, p. 8).

Por ello, en su "Orientación Administrativa", especie de plan de acción presentado por Medina unos meses más tarde, concretamente en enero de 1942,

y sobre el cual basó su labor de gobierno, no hizo sino reiterar las medidas y orientaciones para el desarrollo de una política económica que permitiera crear y consolidar los elementos y condiciones para alcanzar esa transformación capitalista de la economía venezolana propuesta en el proyecto modernizador que animó tanto a este gobierno de Medina como al de López. Entre los puntos clave de esa política contenidos en este documento se encuentran:

1) Desarrollo, intensificación y diversificación de la producción agrícola y pecuaria como fuente perdurable y segura de la economía nacional, así como también impulsar el progreso de aquellas industrias derivadas de esas actividades.

2) Fomento de las actividades industriales mediante programas que alienten las iniciativas privadas como el otorgamiento de créditos a través del Banco Industrial o la exoneración o reducción de los impuestos de importación para la adquisición en el exterior de las maquinarias y enseres necesarios para el desarrollo industrial.

3) Consolidación de un mercado de consumo interno mediante la implementación de programas de construcción de carreteras, caminos y el desarrollo de un vasto plan de vías de comunicación que permitan articular e integrar el territorio nacional.

4) Desarrollo de una legislación fiscal y de un sistema tributario que permitan impulsar las actividades productivas y a través de los cuales el Estado pueda proveerse de los recursos para atender con eficiencia las necesidades nacionales.

5) Creación y/o consolidación de instituciones protectoras del capital y el trabajo como elementos imprescindibles en el desarrollo económico del país (pp. 31 y ss).

En la realización de ese objetivo o intencionalidad de alcanzar la transformación capitalista de la economía venezolana, los gobiernos de López y Medina se plantearon como estrategia fundamental el aprovechamiento al máximo de la renta petrolera por parte del Estado y su inversión en áreas productivas que condujeran al establecimiento del orden económico deseado. Por ello, el empeño de estos gobiernos en lograr que el Estado obtuviera una cada vez mayor participación en las ganancias del negocio petrolero con el propósito de procurarse una base financiera y segura para llevar a cabo esa transformación. Empeño que encontró su punto culminante - como hemos visto - en la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1943.

Se trató de una estrategia que tuvo como fundamento ideológico lo sostenido por Uslar Pietri en un artículo publicado como editorial en el diario *Ahora*, el 14 de julio de 1936, intitulado "Sembrar el petróleo" y que los gobiernos de López y Medina asumieron como principio rector para el desarrollo de su política económica (Avendaño, 1996 y Battaglini, 1997).

De acuerdo a los argumentos del citado Uslar, la renta petrolera debía ser destinada únicamente por el Estado para la inversión en áreas productivas:

Es menester – decía en esa oportunidad – sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayuda, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales (Suárez, 1977, t. I, p. 164)

De lo que se trataba, según Uslar, era destinar la renta petrolera a la acumulación originaria de capital para que con su inversión en áreas productivas (agricultura e industria fundamentalmente), se construyera una economía con bases reales y sólidas para Venezuela, una "economía reproductiva y progresiva" como la denominaba en el citado editorial (p. 165).

Los recursos generados por el petróleo son vistos, pues, por Uslar como fuente de inversión. Tal visión, se identifica con la lógica del capitalismo y una lógica propia de Uslar de entender el petróleo como “capital natural” :

El petróleo no es ni una cosecha ni una renta – sostendría Uslar en 1942-, sino el consumo continuo de un capital depositado por la naturaleza en el subsuelo. Todo capital que se consume y no se reproduce tiene un término (Citado por Avendaño, 1996, p. 219).

Por consiguiente, los recursos provenientes de su explotación y percibidos por el Estado debían emplearse en inversiones productivas y no una parcialidad de esos recursos, sino su totalidad por tratarse de un capital cuyo único destino es su reproducción o inversión y cualquier otro como su consumo no sería más que un acto de irresponsabilidad y negligencia (España, 1989).

Esa inversión debía efectuarla el Estado en crear las condiciones que indujeran al desarrollo de una economía de bases sólidas y seguras mediante la construcción de la infraestructura necesaria y a través de préstamos y otorgamientos de créditos.

Tales argumentaciones sobre el destino de los recursos derivados por la explotación petrolera, serían adoptadas como principio rector en la estrategia diseñada por el gobierno de López para llevar a cabo la realización de su proyecto de modernización capitalista de la economía venezolana. En el Programa de Febrero, el presidente López había dado algunos pasos para orientar la política económica del Estado en tal sentido cuando plantearía como parte de esta última, la necesidad de reformular y perfeccionar la fiscalización las explotaciones petroleras a fin de que rindan al país el máximo de beneficios económicos a que tiene derecho. Con igual sentido, se plantearían al respecto las orientaciones contempladas en el Plan Trienal. Empero, fueron en las Memorias y Cuentas de los ministros vinculados con las actividades económicas donde más claramente se hizo alusión a la adopción de tal principio.

Así, por ejemplo lo declaró Manuel Egaña, Ministro de Hacienda, en la Introducción a la Memoria que este Despacho presentó en 1941:

Es al Estado a quien corresponde no tan solo el incremento de la participación nacional en la riqueza del subsuelo, sino también el óptimo aprovechamiento del beneficio económico que ésta le produzca. Lo primero es una conveniencia que todo el mundo reconoce. Lo segundo, de una necesidad que ya casi nadie discute. El Estado no podría, ni que lo quisiera, dejar de intervenir para enrumbar la riqueza que produce el subsuelo hacia la creación y fomento de otras actividades económicas (Congreso de la República, 1985, t. VIII, Vol. II, Doc. N° 84, p. 288).

Esas argumentaciones sobre el destino de la renta petrolera fueron adoptadas por Medina Angarita para llevar a cabo la modernización capitalista de la economía venezolana durante su gestión de gobierno y como continuación de la estrategia planteada en la política económica de López (Battaglini, 1997).

Otro aspecto a destacar dentro de esa estrategia para el logro de la transformación capitalista de la economía venezolana de acuerdo al proyecto modernizador que animó la política económica seguida por los gobiernos de López y Medina, lo constituye la intervención del Estado, cuestión muy unida a la anterior; es decir, al destino de la renta.

En ambos gobiernos el Estado debía desempeñar el papel de promotor principal en la puesta en marcha de esa transformación; rol a cumplir en virtud de los grandes ingresos que éste manejaría por su condición de propietario de los yacimientos petroleros y por las circunstancias de indisponibilidad en las que se encontraba el capital nacional privado para invertir. Por ello, la necesidad de que el Estado interviniera para asumir la dirección de la actividad económica en general del país, ordenándola y actuando de pionero en ese proceso de transformación (Avendaño, 1996).

Como expresión de esa intervención del Estado como parte de la estrategia para realizar la transformación capitalista de la economía venezolana propuesta en este proyecto modernizador, deben entenderse las palabras anteriormente

citadas de Manuel Egaña, uno de los ministros de Hacienda de López Contreras, contenidas en la Introducción de la Memoria que presentara ese despacho en 1941. Así como también, la siguiente base doctrinaria formulada por el PDV, partido formado a instancias del presidente Medina en 1943 para que sirviera de apoyo a su gestión de gobierno:

La intervención del Estado en la producción, con el objeto de orientarla y hacerla socialmente útil, tanto en orden a las relaciones entre el capital y el trabajo como al equilibrio entre la producción y el consumo (Suárez, 1977, t. II, p. 58)

1.1.2.- Aspectos sociales

Desde el punto de vista social, se puede afirmar, que el proyecto modernizador de López y Medina propendía a la configuración de una estratificación de la sociedad venezolana acorde con esos cambios capitalistas de la economía propuestos en este proyecto y cuyas clases protagonistas fundamentales constituyeran los propietarios de los medios de producción y los obreros e igualmente propendía también a la transformación de los rasgos rurales en urbanos de esa sociedad y, por ende, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana para colocarla en capacidad de producir de acuerdo a los requerimientos del orden económico capitalista que se deseaba establecer.

El primero de los aspectos se refiere a la conformación de una estructuración de la sociedad venezolana acorde con los cambios capitalistas. Tal aspiración puede evidenciarse a través del Programa de Febrero de López Contreras al proponerse en este documento la necesidad de reglamentar las libertades relativas al trabajo; en particular, los derechos de los patronos y los obreros por considerarse que ambos grupos sociales, deberán concurrir a una finalidad común: "la de crear la mayor suma de riqueza pública y de bienestar individual" y evitar de este modo, los posibles conflictos que puedan surgir entre ellos (Suárez, 1977, t. I, p. 126).

Con tal intención debe interpretarse también el planteamiento contemplado en ese mismo Programa sobre la necesidad de que esos grupos sociales se agremien para la defensa o conciliación de sus intereses:

Es altamente deseable que los patronos y los obreros constituyan por su parte los grupos de agremiación profesional, y que éstos tengan un organismo central nacional, pues toda legislación del trabajo, por más avanzada que se suponga, sería inoperante en la práctica, si no existen las organizaciones patronales y obreras, cuyos intereses va a defender o a conciliar (p.126).

Tales planteamientos se reafirmaron luego en el Plan Trienal, documento éste también elaborado durante el gobierno de López Contreras, al proponer en concreto al Congreso la elaboración de una ley reguladora de las relaciones entre capital y trabajo:

Las relaciones entre capital y trabajo, que comprenden principalmente las garantías del patrono para el ejercicio pacífico y remunerador de su actividad, y la justicia económica y social a que tiene derecho el obrero por parte del patrono y del Estado, han sido maduramente estudiados por el Ministerio del Trabajo y de Comunicaciones. Una nueva Ley reguladora imparcial de esas relaciones, garantías y derechos será sometida a vuestro examen ... (pp. 214-215).

Llama igualmente la atención en el citado Plan Trienal, el carácter definitorio que se le atribuye a las relaciones entre patronos y obreros en la determinación del resto de las relaciones entre los demás grupos sociales.

Con idéntica intencionalidad, es decir, de conformar un orden social acorde con la transformación capitalista de la sociedad se implementó también la política seguida al respecto por Medina Angarita. En efecto, desde su alocución inaugural del 5 de mayo de 1941, así lo dejó asentado:

En el orden social mi gobierno continuará la labor llevada a cabo hasta hoy, creará nuevas instituciones protectoras para el capital y el trabajo y patrocinará todas aquellas reformas legislativas que tiendan a consolidar la cultura, la seguridad y el bienestar del trabajador venezolano (Suárez, 1977, t. II, p. 11).

Y ratificada luego por Medina en su "Orientación Administrativa" documento este presentado como una especie de plan de acción - como se ha dicho - a seguir por su gobierno, y en el que destaca la importancia de la concurrencia de

todas las clases o sectores sociales, especialmente, el capitalista y el obrero en la obra de construcción y engrandecimiento de Venezuela:

Si el capitalista moviliza útilmente su capital, si el trabajador entrega sin regateos toda su fuerza y su habilidad a la tarea, si el consumidor emplea su capacidad de consumo como una colaboración, si todos cooperan, si todos estimulan, el instrumento se habrá multiplicado por millones de voluntades incontrastables y tendrá la fuerza y la magnitud para crear una Venezuela engrandecida en todos sus aspectos (p. 40).

En atención a ese interés fundamental de conformar un orden social acorde con la transformación capitalista de la economía venezolana presentada en el proyecto modernizador de López y Medina debe comprenderse el conjunto de acciones y metas que en las áreas económicas y sociales se propusieron estos gobiernos a manera de crear y/o estimular la aparición de las condiciones que hicieran posible el surgimiento y consolidación de esas clases y demás sectores sociales modernos.

En ese sentido, estuvieron las medidas económicas referidas al otorgamiento de créditos por parte del Estado, la reforma fiscal y arancelaria, la implementación de un sistema bancario moderno que propicie el ahorro y la inversión, el desarrollo de la política comercial, entre otras. Todas ellas a emprender como elementos que incentiven las iniciativas privadas en las áreas productivas del país.

En ese mismo orden de ideas cabe señalar los planteamientos sobre la necesidad de regular las relaciones entre patronos y obreros mediante el establecimiento de leyes en las que se estipulen los derechos y garantías de ambos grupos o sectores sociales a los fines de evitar su conflictividad y puedan contribuir armónicamente al desarrollo económico y social del país.

El segundo aspecto se refiere a la transformación de los rasgos rurales en urbanos de la sociedad venezolana y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana para colocarla en capacidad de producir de acuerdo a

los requerimientos del orden económico capitalista a establecer. El conjunto de medidas y acciones contempladas en el Programa de Febrero, el Plan Trienal de López Contreras y en la Orientación Administrativa de Medina evidencian ese propósito.

Al respecto ambos gobiernos se propusieron desarrollar una vasta política social la cual podría resumirse en la consigna pronunciada tantas veces por López Contreras: "Sanear, educar y poblar". Tres puntos esenciales que comprendían otros:

A nivel sanitario:

La realización de planes de saneamiento ambiental que abarcaría campañas de prevención y lucha contra las principales enfermedades que aquejaban a la población en esos momentos como la anquilostomiasis, el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades venéreas; la construcción de hospitales y centros dispensarios; formación de personal especializado en higiene pública y medicina; campañas de protección a la madre y al niño recién nacidos; construcción de obras de drenaje público para evitar las infecciones; campañas de control y protección sanitaria de la población trabajadora tanto del campo como de las ciudades; promoción de leyes de seguridad social, entre otros.

A nivel educativo:

La reorganización de la educación con el fin de equipararla con "los pueblos más adelantados", mediante la reformulación del sistema educativo en todos sus niveles, especialmente, la Escuela Primaria. La promoción de la capacitación tecnológica de la población a fin de que contribuya al desarrollo económico del país a través de la creación de institutos especializados en esta área. La construcción de edificaciones escolares en todos los niveles; el desarrollo de campañas de alfabetización; la implementación de planes para la formación del

personal docente en todos los niveles del sistema educativo mediante la reorganización de las Escuelas Normales y la creación de un instituto pedagógico para la preparación del profesorado de Educación Secundaria. La dotación de bibliotecas escolares; el mejoramiento de las condiciones salariales de los docentes, entre otras.

A nivel de poblamiento:

El desarrollo de un sistema de carreteras y vías que sirvieran de enlace entre los centros de producción, distribución y consumo; la construcción y reconstrucción de puertos y aeropuertos; la creación de una red nacional de comunicación a través del mejoramiento de los servicios postales y telegráficos y la realización de una política de inmigración para el aumento de la población, entre otras.

1.1.3.- Aspectos políticos.

En lo político, el proyecto modernizador que animó a los gobiernos de López y Medina pretendía el establecimiento de un orden democrático-representativo, basado en elecciones libres y universales y en el ejercicio pleno de sus derechos y deberes por parte de los ciudadanos.

Tal aspiración se puede apreciar en el Programa de Febrero cuando en este documento se plantea la necesidad de reorganizar la administración de la justicia como una de las bases imprescindibles para alcanzar la democracia:

Esta reforma y las de las leyes que rigen el procedimiento judicial, asegurarían una justicia rápida, eficaz y no onerosa. No debe olvidarse que la democracia se funda tanto en la libertad como en la justicia, y que ésta no puede alcanzarse sin jueces imparciales, probos y capaces (Suárez, 1977, T. I. p. 125).

También puede apreciarse en el Plan Trienal cuando se afirma que

Una democracia no puede ser justa en sus principios ni fecunda en sus resultados sin el bienestar individual de los hombres que la integran, y el primer bienestar es el que se relaciona con la salud física y la holgura económica del hombre (Suárez, t. II, p.199)

Igualmente se evidencia esa aspiración en los diversos discursos oficiales pronunciados por ambos presidentes. Así, por ejemplo, el presidente López en su Mensaje ante el Congreso en 1940, la planteaba al expresar la necesidad de " la educación del pueblo para la exacta inteligencia de la democracia" (citado por Davila, 1988, p.87).

En el caso del presidente Medina, éste lo haría en la Alocución inaugural de su gobierno al presentar como objetivos del mismo los siguientes:

Imperio absoluto de la ley, orientación progresiva hacia la consolidación de los principios liberales que nos han regido constitucionalmente, y firme propósito de conquistar todas las normas de la Democracia Verdadera (Suárez, 1977, t.II, p. 8).

Si bien las anteriores citas sirven para corroborar que en el proyecto modernizador de la sociedad venezolana presentado por los gobiernos de López y Medina, se aspiraba a establecer un orden democrático, las mismas nos revelan además que este último constituía sólo eso, una aspiración, objetivo o propósito a alcanzar luego de un proceso de maduración política de la población venezolana a realizarse a través de su educación y ejercitación progresiva en los valores, elementos y prácticas democráticas. La democracia es concebida, pues, en ese proyecto como afirma Sosa (1989), como "el fruto paulatino del proceso modernizador" (p. 972).

La dinámica política derivada de esa forma de concebir la democracia en el proyecto modernizador de López y Medina y que algunos han categorizado como "Democracia Evolutiva" (Dávila, 1988, p. 81), implicaba la incorporación gradual de la población venezolana en el pleno goce de los derechos y garantías

democráticas, particularmente aquellos relacionados con la libertad de organización y de opinión.

Se trataba, por consiguiente, de ir otorgando progresivamente esos derechos a medida que esa población fuera alcanzando una especie de “conciencia cívica” a través de la educación para emplear términos de Dávila (1991) y que hubiere la posibilidad de ejercerlos efectivamente. Fórmula política que encuentra su expresión en las siguientes palabras pronunciadas por López Contreras en su Alocución durante la toma de posesión como Presidente Constitucional en abril de 1936:

Educar progresivamente al elemento humano: su inteligencia, sentimiento y voluntad para así irlos incorporando al ejercicio pleno de sus derechos políticos (citado por Dávila, 1991, p.181).

Todo lo cual se traduciría en el establecimiento de un “Régimen de Legalidad” propuesto por el mencionado López Contreras en el Programa de febrero como orden o etapa política necesaria a realizar:

En materia de política general, el gobierno tiene el firme propósito de hacer efectivo, por todos los medios que estén a su alcance, el funcionamiento de un régimen de legalidad. La ley respetada por el magistrado y obedecida por el ciudadano, es la condición de todo pueblo libre (Suárez, 1977, t. I, p.124).

Tal régimen de legalidad consistió en el otorgamiento y respeto de ciertas garantías y libertades democráticas a ser ejercidas por la población dentro de un marco de orden y disciplina en el que se estipulaban las condiciones para su desarrollo y se establecían, por consiguiente, las restricciones a esas garantías y libertades.

En ese orden o etapa política, la ejercitación paulatina de las libertades públicas circunscritas a un régimen de legalidad permitiría habituar y educar a la población venezolana en la práctica de esas libertades, y adquiriera de este modo esa especie de conciencia cívica como condición esencial para su incorporación

al ejercicio pleno de sus derechos políticos y, por ende, al establecimiento de una “democracia verdadera” tal como la denominó Medina en palabras citadas anteriormente.

El planteamiento de la construcción de un orden democrático como meta a alcanzar en el proyecto modernizador de López y Medina a través de la incorporación evolutiva o progresiva de la población venezolana en el ejercicio de las libertades y garantías democráticas, se fundamentó en el supuesto sostenido por estos gobiernos por el cual se estimaba a esa población impreparada para el ejercicio efectivo e inmediato de tales libertades, esgrimiéndose al respecto razones raciales, sociológicas e históricas para justificarlo.

En efecto, en su último mensaje al Congreso Nacional en 1941, el presidente López Contreras diría con relación a esa impreparación lo siguiente:

Soy el primero en reconocer que aún no hemos logrado llevar a la práctica todas las conquistas de la democracia, pero ello no se debe a una acción negativa del régimen sino a circunstancias de carácter racial, ambiental e histórico que es menester ir encauzando con la evolución ininterrumpida del elemento humano, cuya inteligencia, sentimiento y voluntad es necesario educarlos progresivamente para el ejercicio de los derechos políticos (citado por Dávila, 1991, p. 183).

En ese mismo sentido, se expresaría el presidente Medina Angarita en su libro “Cuatro años de Democracia”, al explicar los motivos que en su opinión habían obstaculizado el avance democrático durante su gobierno:

Mas veníamos de una dictadura que pudo dejar bienes materiales al país, pero que nos mantuvo en la más absoluta ignorancia de prácticas democráticas a cuya plena efectividad no podíamos llegar de un salto sin exponernos a graves consecuencias. Debíamos avanzar sin pausas pero sin precipitaciones, como alguna vez lo dije, y buscar la ampliación de algunos derechos, la modificación de ciertos métodos que fijando avances, nos dieran con su ejercicio la práctica y experiencia necesaria para llegar a la plenitud de nuestras aspiraciones (1963, p. 35).

De acuerdo a esos razonamientos, se hacía imprescindible que la población venezolana atravesara una etapa en la que se le preparara o educara en la

comprensión de “la exacta inteligencia de lo que es la democracia”, como dijo López Contreras en su Mensaje al Congreso en 1940 (citado por Dávila, 1989, p. 87); etapa en la que se produciría el encauzamiento de las inquietudes y pasiones de esa población al tiempo que se le habituara e incorporara progresivamente en el ejercicio de sus derechos políticos conducentes al establecimiento definitivo del orden democrático.

En correspondencia con esos razonamientos sobre la impreparación de la población venezolana, se comprende la estrategia desplegada por los gobiernos de López y Medina para llevar cabo su proyecto modernizador de la sociedad venezolana; es decir, la manera de vehiculizar ese proyecto en cuanto a quiénes constituirían los sujetos responsables directamente de realizarlo y en cuanto también a cómo sería la implementación de las prioridades de los aspectos económicos, sociales y políticos que lo integraban.

En relación a los sujetos o agentes que debían emprender la modernización, éstos estarían constituidos por una élite gobernante, la cual, desde el Estado, debía dirigir y orientar los cambios económicos, sociales y políticos de la sociedad venezolana. Se trataba, pues, como sostiene Dávila, de una modernización que “carecía de base popular”, en la que el pueblo era considerado más como beneficiario que como protagonista de la misma y en la que “sus agentes sociales era un grupo de juristas y tecnócratas quienes a la cabeza del Estado dirigirían la transformación” (p. 31).

La responsabilidad de llevar adelante la modernización descansaría, por tanto, en manos de una minoría o grupo consciente de los pasos necesarios a dar para orientar y guiar el proceso modernizador. La modernización es concebida, pues, como los esfuerzos de esa minoría o élite que desde el Estado debía orientar y dirigir su implementación.

Por ese papel pasivo a desempeñar por el pueblo en la transformación modernizadora y por considerar a esta última como labor exclusiva a realizar desde el Estado por una minoría gobernante; es por lo que algunos han estimado a esa modernización propuesta por López y Medina como “una modernización desde las élites” (España, 1989, p.87) o “una modernización de arriba hacia abajo” (Sosa, 1999, p. 442).

Tal proceso modernizador conducía de hecho al establecimiento de un “sistema político cerrado” como fueron los gobiernos de López y Medina, según sostiene Dávila, con escasa representación de la sociedad, y en el que la participación en el goce pleno de los derechos políticos se circunscribía a una minoría. Se trataba, por consiguiente, de un orden político de libertades democráticas limitadas de y para uso de minorías con exclusión de las mayorías populares al que podemos calificar de “Democracia representativa restringida”.

Expresión de ese tipo democracia practicada por los gobiernos de López y Medina lo representa el sistema eleccionario plasmado en la Constitución aprobada en julio de 1936 y por el cual se limitaba el derecho de sufragio a los hombres venezolanos alfabetas mayores de 21 años y únicamente para la elección directa de los representantes a los Concejos Municipales y Asambleas Legislativas; en tanto que se establecía la elección indirecta o de segundo grado para el Presidente de la República y para la integración de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso Nacional.

Sistema que se mantuvo vigente también en tiempos de Medina a pesar de las tímidas reformas constitucionales introducidas al respecto en 1944 y por las cuales se concedía el voto a la mujer pero limitado a las elecciones municipales y se establecía el voto directo para la elección de los diputados, pero continuando restringido a los varones alfabetas mayores de 21 años.

Asimismo, cabe acotar que tal orden democrático realizado por los gobiernos de López y Medina se efectuaba en unas circunstancias en las que la población venezolana estaba compuesta por una gran mayoría de analfabetos, como veremos más adelante; y sólo una minoría, constituía la población potencialmente electoral, de la cual había que considerar únicamente los varones mayores de 21 años como votantes efectivos.

En cuanto a la manera cómo debía realizarse la modernización de la sociedad venezolana; esto es, al establecimiento de prioridades que debían tener los aspectos económicos, sociales y políticos del proyecto al momento de su implementación; se razonaba al respecto que un país como Venezuela con una economía atrasada y en crisis, los problemas económicos y sociales constituían los más urgentes e inmediatos a resolver antes que los políticos. Así lo declaraba López Contreras en el Plan Trienal:

Mi experiencia de dos años al frente del poder me ha llevado al convencimiento de que nuestras necesidades públicas más esenciales estriban en una mayor producción y rendimiento de la economía nacional, en el abaratamiento del costo de la vida y en esta trilogía inseparable: sanear, educar y poblar. De allí que la mayor parte de las provisiones del Plan Trienal persigan de preferencia objetivos materiales de la administración, aun cuando guardan sin embargo relación estrecha con el adelanto intelectual y cultural de Venezuela (...) Hay que partir del principio de que no podría intentarse aisladamente ese adelanto sin la preparación de los llamados factores materiales a servirle de asiento, o, por lo menos, sin un paralelismo de las dos acciones. Vale esto decir: que una mejora de las condiciones de la vida vegetativa de nuestras masas debe tener cierta preeminencia en el empeño de ilustrarlas (Suárez, 1977, t. I, pp.198-199).

Y trazó en ese mismo plan la consecución de los objetivos y metas en los aspectos económicos y sociales como condición previa en el logro de los referidos al aspecto político:

Una democracia no puede ser justa en sus principios ni fecunda en sus resultados sin el bienestar individual de los hombres que la integran, y el primer bienestar es el que se relaciona con la salud física y la holgura económica del hombre (p. 199).

En términos similares se expresó, el presidente Medina Angarita en su Orientación Administrativa de 1942:

Sanear, articular e integrar por medio de las comunicaciones el territorio, hacer más justa y feliz la vida de sus actuales habitantes y preparar el necesario crecimiento de la población, son claros, previos y precisos objetivos de esa lucha que yo quisiera ver convertida en una vasta empresa nacional, acometida al unísono con todos (Suárez, 1977, t.II, pp. 31-32).

En el proyecto modernizador de la sociedad venezolana sustentado por López Contreras y Medina Angarita, el establecimiento de un orden democrático pleno y efectivo aparece, pues, como una meta u objetivo a alcanzar después de un proceso de maduración política de la población mediante su educación y ejercitación progresiva de sus derechos políticos y subordinado a la realización previa de los propósitos en los aspectos económicos y sociales que comprendía también ese proyecto.

De lo que se trataba, como bien lo señala España (1989), era que la élite gobernante acometiera en un primer momento “el proceso civilizatorio” y luego abriera el campo de los derechos políticos; la ejercitación plena de esos derechos representa en ese proyecto “un segundo momento de la modernización” (p. 89).

1.2.- La democracia representativa ampliada (populista)

Como ha quedado señalado anteriormente, en el seno del sector de las llamadas fuerzas democráticas radicales, surgió otra propuesta modernizadora de la sociedad venezolana, la cual se fue concretando en los movimientos y partidos políticos que tales fuerzas conformaron a partir de 1936, pero particularmente, en aquellos movimientos y partidos organizados por los ex – ardistas o la generación estudiantil del 28, quienes, como bien acota Dávila, contaron para 1939, con la estructuración de “un proyecto modernizador alternativo” al proyecto lopecista-medinista (1989, p.32).

Como también se ha indicado, a la muerte de Gómez ingresaron al país Rómulo Betancourt y Raúl Leoni; quienes al unirse a Alberto Adriani, Mariano Picón Salas, J.J., González Gorrondona, Guillermo Meneses y algunos otros,

fundaron – en marzo de 1936 – el Movimiento de Organización Venezolano (ORVE), el cual, presentó un “Manifiesto - Programa” donde solicitaba la transformación de la sociedad venezolana con miras al establecimiento de una sociedad moderna y democrática.

En la actuación de ese movimiento durante 1936, se pueden distinguir dos etapas, producto de la coexistencia en su composición de los dos sectores en que se dividían las fuerzas democráticas. Una primera etapa desde su fundación hasta la huelga general en junio de 1936, en la cual mantuvo una actuación “colaboracionista” con el Programa de Febrero presentado por López Contreras y en la que algunos de sus miembros entraron al gabinete de este presidente. Y la otra a partir de la mencionada huelga, cuando se produjo una especie de “depuración ideológica”, saliendo el sector moderado y quedándose al frente de la organización sus miembros más radicales.

A partir de esos momentos dejó de considerarse un movimiento y comenzó a llamarse “partido político” y presentó por entonces un nuevo programa político que al decir de Dávila (1991), seguía “las principales orientaciones del programa anterior” pero ampliando más detalladamente sus puntos. Así, en lo económico, se proponía la creación de un sistema bancario dirigido por el Estado; la adopción de una política monetaria de interés para la nación; el desarrollo de una política fiscal basado en la implementación de un sistema tributario que sustituyera al de los impuestos indirectos; el desarrollo de una política comercial regulativa del comercio exterior y con miras al fomento del mercado interno; la aplicación de una política minera en la que se mejorara la situación del Estado con respecto a su participación en las ganancias de la industria petrolera, entre otras.

En lo social, se presentaba un conjunto de medidas con miras al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los trabajadores industriales, jornaleros del campo, empleados del comercio, empleados públicos, entre otros.

En lo político, se planteaba la sustitución del régimen presidencialista por un sistema parlamentario racionalizado, en el cual, se restringe la atribución de las cámaras para derrocar los gabinetes (pp.144-145).

A pesar de esa última novedad en materia política, las orientaciones de este último programa presentado por ORVE ya como partido político constituyeron una continuidad de las contenidas en su primer Programa- Manifiesto, como ya se ha dicho. Esto es la transformación moderna y democrática de la sociedad venezolana.

Para octubre de 1936, ORVE conjuntamente con el Partido Republicano Progresista (PRP), el Bloque Nacional Democrático (BND) de Maracaibo, la Federación de Estudiantes de Venezuela-Organización Política, el Frente Obrero y el Frente Nacional de Trabajadores, decidieron constituir un partido único de las fuerzas de izquierda: el Partido Democrático Nacional (PDN); el cual no fue legalizado por el gobierno de López. Este partido presentó un programa de acción en el cual planteaba la implantación de un régimen auténticamente democrático para Venezuela y recogía las principales consignas y orientaciones que al respecto sostenían los partidos integrantes de este frente único de las izquierdas.

Como se ha dicho, este partido no fue legalizado y se decretó la expulsión del país de sus principales miembros a principios de 1937, obligando su actuación clandestina. Durante este año, entre los militantes de ORVE y el PRP se produjo una pugna en la reorganización de las bases políticas del PDN; pugna que implicó cierta depuración ideológica y que terminó con el retiro de los militantes del PRP inclinados hacia las ideas marxistas. Para 1938, el control del PDN estaba totalmente en manos de los orvistas con Rómulo Betancourt, Inocente Palacios, J. A Paz Galarrága, Oropeza Castillo, Gonzalo Barrios, Ruíz Pineda, Valmore Rodríguez, entre otros como miembros de la dirección del partido

Para 1939, el PDN presentó unas extensas tesis políticas y su programa, los cuales, como sostienen Dávila (1991) y Sosa (1995), encierran un proyecto de transformación moderna y democrática de la sociedad venezolana alternativo al proyecto modernizador elaborado por López y Medina.

Veamos las principales propuestas en sus aspectos económicos, sociales y políticos de ese proyecto.

1.2 1.- Aspectos económicos

La transformación modernizadora que propone el PDN quiere fundamentarse sobre bases reales; de allí, que su propuesta al respecto parte previamente de la realización de un análisis exhaustivo de lo que Venezuela constituía económicamente hasta entonces, caracterizándola en esas Tesis y Programa como “un país semicolonial y semifeudal”, atado económica, fiscal y políticamente al imperialismo, “con una economía predominantemente agropecuaria”, estancada por el latifundio e incapaz de asegurar su independencia económica por carecer de industrias nacionales y depender de los ingresos fortuitos provenientes de la explotación petrolera (Suárez, 1977, t. I, pp. 244-245).

Sobre la base de esa caracterización se planteaba la transformación de la economía venezolana existente en los términos siguientes:

En lo económico lucharemos por la más pronta desaparición de la crisis que estanca la vida de la Nación y por el desarrollo intensivo y rápido de nuestra producción. Para eso, junto con las medidas inmediatas de supresión de las trabas feudales existentes, de ayuda a la agricultura, a la cría y a la industria, de aumento de capital circulante, buscaremos se ponga en práctica un amplio sistema tendiente a despertar y sostener la iniciativa privada mediante créditos baratos, la protección arancelaria racional, ante la invasión del producto extranjero y la aplicación de un sistema tributario que proporcione al Estado las entradas que necesite para llenar a cabalidad la función social que le asignamos. Esto, y el aumento de la capacidad de consumo de la población por obra de una política social honrada y amplia dará al mercado interior una mayor capacidad adquisitiva sin la cual no será jamás posible el desarrollo de la industria nacional y de la producción campesina. No sólo por lealtad a principios fundamentales de justicia social hacemos nuestra fervorosa proclamación de una política de mejoramiento

obrero y campesino, que dé vitalización a todas las fuerzas productoras del país. Reconoce ésta, además, una razón de carácter científica y práctica: que sin tal mejoramiento no se puede crear a la industria y a la agricultura venezolana el mercado interior que le es necesario (pp. 266-267).

En la anterior cita realizada intencionalmente en extenso, se nos revelan dos aspectos de la modernización económica propuesta: por un lado la naturaleza y objetivos perseguidos en esa modernización y de otro, la estrategia a seguir para vehiculizarla.

En cuanto al primer aspecto, sobre la naturaleza y objetivos de la modernización económica propuesta en este proyecto, el objetivo que se persigue no era otro que el de alcanzar la transformación capitalista de la economía venezolana mediante la creación de las condiciones que permitieran estabilizar sus cimientos: la formación de capital con miras a la inversión, el establecimiento de la relación capital-trabajo como factor esencial en el desarrollo económico y en la generación de riquezas, la instauración de relaciones sociales en torno al binomio obrero-capitalista y la conformación de un mercado interno de consumo sólido que sirviera de incentivo para el incremento de la producción agropecuaria e industrial.

En esa intención de alcanzar la transformación capitalista de la economía venezolana se proponía el desarrollo de un vasto plan de acción denominado "Reconstrucción económica de Venezuela", entre cuyas medidas fundamentales se contemplaban las siguientes:

a) La planificación de la economía nacional mediante: un estudio científico de las posibilidades económicas del país, la reforma del aparato administrativo del Estado, la creación de organismos planificadores como "el Consejo de la Economía Nacional", destinados a orientar la acción del Estado en el desarrollo de las diversas actividades productivas del país: agricultura, industria, comercio, minería, comunicaciones, irrigación y servicios.

b) La realización de una reforma agraria que implicara: el parcelamiento y distribución en calidad de usufructo de esas parcelas a los campesinos de las tierras confiscadas a los gomecistas; el desarrollo planificado de la inmigración; la creación de colonias agrícolas; la elaboración de leyes que limitasen los latifundios; la implementación de medidas protectoras del trabajo agrícola; la organización de un amplio sistema de créditos agrícolas y el desarrollo de programas de asesoría agrícola que comprendiera la distribución de semillas a los pequeños productores y campesinos pobres.

c) La realización de una reforma bancaria y fiscal que tendiera a la formación de un sistema bancario que permitiera hacer efectiva la intervención del Estado en el desarrollo de la economía del país; que ofreciera garantías en la concesión de créditos a plazos razonables a todas las fuerzas productoras del país e implicara además, la abolición de aquellos impuestos que eran considerados como cargas onerosas para la población y la creación del impuesto directo y progresivo sobre la renta.

d) El desarrollo industrial del país mediante: la implementación de efectivas medidas proteccionistas de la industria nacional ante la competencia extranjera, el estudio planificado de las posibilidades industriales de la nación, la creación de y fomento por parte del Estado de industrias transformadoras de materias primas, el otorgamiento de créditos industriales a través de organismos e instituciones creados al respecto, la formación de los recursos humanos y técnicos requeridos para la industrialización, entre otras medidas al respecto.

e) La conformación de una legislación del trabajo que implicara: la estricta aplicación de la ley que se elaboraría a respecto; la implementación de medidas que garantizaran la igualdad de salarios en puestos y condiciones similares tanto para el hombre como para la mujer; la participación del obrero en la utilidades de las empresas, el establecimiento del seguro social obligatorio y el reconocimiento de los trabajadores a organizarse, entre otras medidas (pp. 270-274).

En cuanto al segundo aspecto, la estrategia a seguir para viabilizar la realización del proyecto modernizador de la sociedad venezolana presentado por los pedenistas, se sostiene – en la anterior cita realizada en extenso - la intervención de manera directa y relevante del Estado venezolano y el uso de los recursos provenientes de la renta petrolera como los elementos claves para llevar adelante esa transformación.

En ese sentido, en las Tesis y programa del PDN, el Estado venezolano era considerado “capacitado como pocos en América Latina” para emprender ese proceso en virtud de su potencialidad económica como resultado de los ingresos percibidos por concepto de la explotación petrolera. Por ello, en esas mismas tesis se planteaba que el Estado debía constituirse en el agente principal de esa modernización capitalista de la economía venezolana interviniendo y fomentando la industrialización, construyendo la infraestructura necesaria, promoviendo el consumo y subsidiando los servicios públicos; tal como se evidencia también en las medidas contempladas en el plan de acción denominado “Reconstrucción económica de Venezuela” y que acabamos de resumir .

Como se ha señalado, esa estrategia comprendía igualmente el empleo de la renta petrolera como fondo financiero para lograr la modernización económica del país. En las referidas Tesis y programa del PDN se planteaba no sólo su inversión en áreas productivas, sino también el aumento de la capacidad adquisitiva de la población a través de “ una política social honrada y amplia”, propiciando de esta manera, el surgimiento de un sólido mercado de consumo interno que serviría de incentivo al desarrollo de la industria nacional y a la producción agrícola y pecuaria del país.

Por consiguiente, como señala España (1989), la renta petrolera servirá “no sólo para financiar la acumulación originaria para modernizar al país , sino además (...) mejorar con ella las condiciones de la población a través de la acción del

Estado". Por tanto, el planteamiento de una política social en este proyecto modernizador pretende, a la vez que elevar las condiciones de vida de la población, buscaba aumentar también su poder adquisitivo y crear con ello un sólido mercado de consumo interno. Política social que se desarrollaría mediante el incremento de salarios, la elevación del gasto público y la puesta en marcha de programas de asistencia social (educación, salud y alimentación) (p.92).

La creación de un sólido mercado interno mediante el aumento del poder adquisitivo de la población a través de desarrollo de una política social auspiciada por el Estado, aparece en este proyecto modernizador como el primer paso a dar para emprender la industrialización del país. Se razonaba al respecto que de nada serviría crear grandes industrias si en contrapartida no existía un mercado interno amplio e integrado que tuviera poder de compra para consumir lo que esas empresas producirían (España, 1995).

De acuerdo a ese planteamiento, la política económica a desarrollar por el Estado venezolano debía orientarse hacia dos tipos de intereses. Por un lado, financiar la creación y consolidación de un sector productivo y por otro, atender los problemas materiales de la población. Ambos intereses imbrincados es lo que constituiría "la nueva función social", a ser asumida por el Estado.

Por ello, en este proyecto del PDN se contemplaban medidas tendientes a obtener una mayor optimización de la participación del Estado en la explotación petrolera como la revisión de las concesiones y la elaboración de una nueva legislación de hidrocarburos que preservase la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre el negocio petrolero y poder atender a esos dos intereses antes señalados, es decir, destinar la renta petrolera a la acumulación del capital y mejorar las condiciones materiales de la población.

Con ello se perseguía, según Sosa, la realización de una modernización "con sentido de justicia social", entendiéndose que el proceso de transformación

económica propuesto no sólo tuviera como objetivo la producción de riquezas, sino efectuar también “un cambio cualitativo” en todos los sectores de la sociedad hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Se trata, por tanto, de un desarrollo económico con sentido social, según los planteamientos de este proyecto modernizador. Tal dimensión social no aparece, pues, desligada de los objetivos perseguidos en la transformación económica a alcanzar, sino imprescindiblemente vinculada a ellos (p.237).

1.2.2.- Aspectos sociales

En lo social, al igual que el proyecto modernizador de López y Medina, el de los pedenistas propendía también al establecimiento de una estratificación de la sociedad venezolana acorde con la transformación capitalista de la economía propuesta en este proyecto y cuyas clases protagonistas fundamentales estuvieran constituidas por los propietarios de los medios de producción, los trabajadores y demás sectores sociales intermedios modernos.

Tal propensión para la configuración de ese orden social queda plasmada a todo lo largo del extenso análisis que sobre la realidad económica-social se presenta en las Tesis y programa del PDN y sobre el cual nos hemos fundamentado para efectuar la descripción de la composición de la sociedad venezolana entre 1936-45 (Véase el capítulo anterior). En esta descripción, se contrastan las características progresistas y modernizantes de las incipientes relaciones sociales basadas en el capital y el trabajo con los rasgos de atraso y estancamiento de aquellas relaciones sociales calificadas de “semifeudales” o “feudales”. De allí, la proposición de sustituir estas relaciones sociales por aquellas nuevas derivadas de la vinculación capital-trabajo, tal como se desprende de la siguiente cita referida al sentido que debe tener – según el PDN – el establecimiento de la democracia en Venezuela en los aspectos económicos y sociales:

Para nosotros régimen democrático implica efectividad de las libertades públicas. Pero también y fundamentalmente, modificación profunda de la organización económica del país y democratización de la estructura de la economía nacional. No concebimos la democracia sino como régimen gubernativo que a un mismo tiempo permita el libre juego de las fuerzas sociales y quebrante en el campo, mediante la abolición del latifundio, las relaciones feudales de propiedad, intervenga en las ciudades en la producción industrial y desarrolle el comercio protegiendo decidida y francamente a todas las fuerzas vivas, en especial a los sectores menos beneficiados de la riqueza que son los trabajadores manuales e intelectuales (Suárez, 1977, t. I, p. 267).

En función de ese interés por conformar un orden social amplio y diversificado - acorde con la transformación capitalista propuesta en el proyecto modernizador del PDN - debe entenderse el conjunto de medidas que a nivel económico, se presentan en este proyecto a través de las cuales se perseguía estimular o acelerar las condiciones que permitieran el surgimiento y consolidación de las clases y demás relaciones de producción propias a esa transformación.

En ese mismo orden de ideas se enunciaron las medidas relacionadas con la planificación de la economía del país, las acciones planteadas para efectuar una reforma agraria efectiva tendiente a la modernización del campo venezolano, las medidas fiscales y arancelarias a implementar para alcanzar también la modernización de la banca y el sistema tributario e igualmente, las medidas a tomar para el fomento de la industrialización nacional; medidas éstas a través de las cuales se buscaba como se señala en esas Tesis y programa del PDN, " la coordinación y unificación del desarrollo de todas las fuerzas productoras del país" (p. 270).

Si bien, en el proyecto de modernización presentado por los pedenistas, se evidencia un interés por la configuración de una estratificación de clases sociales adecuada a la propuesta de transformación capitalista de la economía; en este mismo proyecto se manifiesta también el propósito de desarrollar una política social tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida de los distintos sectores de la población venezolana, especialmente, la de los menos favorecidos.

Tal política social comprendía lo que algunos han denominado “la distribución popular de la renta petrolera” a través de variados mecanismos como el aumento general de salarios, importación de alimentos y productos terminados, desarrollo y ampliación de políticas de salud, educación y vivienda entre otras que produjeran el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares y con lo cual crear las bases de una población numerosa y con poder adquisitivo (España, 1995, p. 29)

En la realización de esa política social, se le atribuye al Estado venezolano un papel trascendental; en él recae la responsabilidad de llevarla a cabo en virtud de la potencialidad económica y capacidad de destinar con holgura recursos para financiar y efectuar esas nuevas funciones sociales que según el proyecto modernizador del PDN debe cumplir.

Con el desarrollo de esa política social – según señalan algunos (Sosa, 1994) –, la modernización propuesta en este proyecto adquiere un sentido pleno, no se trata de una modernización sólo para alcanzar la industrialización del país, sino una modernización que sirva al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los venezolanos.

1. 2.3.- Aspectos políticos.

El proyecto modernizador pedenista propone la instauración de un orden democrático representativo, en el que el pueblo elige a sus legisladores y gobernantes a través del sufragio universal como única vía legítima para acceder al poder político, a efectuarse por períodos determinados en los cuales se garantice la alternabilidad; orden democrático asentado también en el reconocimiento de la división de los poderes, en el ejercicio pleno de los derechos y deberes de los gobernados y en la participación de estos últimos como ciudadanos. Tal aspiración queda clara en las referidas tesis y programa de este partido en los términos siguientes:

En lo político nuestra posición queda categóricamente definida por el credo democrático que sustentamos. Fundándonos en el estado actual de la sociedad venezolana, que reclama urgentemente un régimen político propicio al libre desarrollo de todas las actividades económicas y culturales, condenamos de antemano el sistema absolutista y autocrático. Cualquiera que sea el nombre o los fines con que se pretenda justificarse. Luchamos por la restitución a nuestro pueblo de su soberanía mediante la elección de sus representantes por el sufragio universal y como fase también inmediata la liquidación del gomecismo ... Consideramos que la libertad no puede fundamentarse sin una enérgica política de respeto a los derechos ciudadanos que garantiza el credo democrático (Suaréz, 1977, t. I, p. 267).

En este proyecto modernizador, la aspiración por alcanzar un orden democrático para Venezuela no constituye una meta a lograr luego de un proceso de maduración política de la población venezolana. Su planteamiento consiste en la instauración "inmediata y efectiva" de ese orden, tal como se desprende de la anterior cita y reafirmada luego en el apartado denominado "Afirmación del Estado Democrático" comprendido también en las Tesis y programa de PDN:

Instauración de un régimen de gobierno auténticamente democrático que sea la verdadera expresión de la voluntad de las mayorías populares. Efectividad del principio de nuestro Derecho Público, único que puede servir de base a la Ley: **"LA SOBERANÍA RESIDE EN EL PUEBLO, QUIEN LA EJERCE POR MEDIO DE LOS PODERES PUBLICOS"**. Por iguales derechos civiles y políticos para el hombre y la mujer. Sufragio universal a favor de todos los venezolanos mayores de edad. Elección por sufragio universal del Presidente de la República. Derecho a ser elegido para todas las funciones políticas (p.269. Mayúsculas en el texto).

En ese sentido, la instauración de la democracia aparece en el proyecto modernizador del PDN como una urgente necesidad a realizar de modo inmediato, oponiéndose de esta forma, a cualquier gradualismo o proceso evolutivo que tuviera como meta su logro a largo plazo. La democracia, pues, es concebida en este proyecto – como bien sostiene Sosa (1995) "no solamente como el punto de llegada sino el camino para llegar" (p. 16).

Con ello, tal visión de la democracia se opone a la sustentada en el proyecto modernizador lopecista-medinista, en la cual, el establecimiento del

orden democrático había que realizarlo después de la formación cívica de la población o cuando ésta estuviera preparada para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Por el contrario, en el proyecto pedenista, se desestima este argumento y se sostiene que no hay manera de que la población aprenda la democracia, sino ejerciéndola; es decir, haciéndose efectivo y pleno el goce inmediato por parte de la población de sus libertades y garantías públicas.

Por otra parte, la visión de la democracia como “punto de llegada” a la vez que como “vía o camino para llegar” se corresponde con el planteamiento en este proyecto sobre quién o en quiénes recaería la responsabilidad del proceso de modernización. Para el proyecto modernizador pedenista, esa responsabilidad estaría en el pueblo mismo, constituido éste por todos aquellos sectores de la población cuyos intereses progresistas coincidieran en llevar adelante el tipo de transformación propuesto.

De allí, el planteamiento de una amplia apertura de los derechos políticos a la población, particularmente los referidos a su organización en partidos políticos que permitieran la participación de las masas populares y su incorporación directa en el proceso modernizador como agentes directos del mismo y no como simples beneficiarios. En las Tesis y programa del PDN, una vez delineados en las mismas los rasgos en los aspectos económicos, sociales y políticos de la transformación deseada para Venezuela, se lee al respecto lo siguiente:

Esta transformación económica y social del país exige la existencia de un organismo político popular, no clasista, que canalice el anhelo de liberación de nuestro pueblo y lo oriente y dirija hacia la conquista de las formas económicas y políticas que sinceramente hemos apuntado (Suárez, 1977, t. I, pp. 264-265).

En otros documentos emitidos por ese partido y contemporáneos a esas tesis y programa, se declara también ese planteamiento. Así, en un Boletín interno de circulación clandestina fechado en febrero de 1939, se contempla al respecto lo siguiente:

La conquista de la democracia popular exige la presencia de un partido férreamente organizado, mayoritario, que agrupe y conduzca a los densos sectores populares del país a asumir el control del Estado en el preciso momento en que las condiciones internas de Venezuela y la situación internacional así lo permitan. De un partido de táctica flexible, que al mismo tiempo que luche por una transformación a fondo de la realidad social del país, sepa combatir en todo momento por la democracia política (Presidencia de la República, 1995, p.156).

Empero, no se trataba de la conformación de un partido cualquiera, sino de partidos que constituyeran - como sostiene España (1989, p.93) – “una agregación de intereses”; es decir, partidos que actuaran en representación de los más amplios y variados intereses de los diversos sectores integrantes de la población venezolana, a los cuales, en la cita anterior de las Tesis y programa del PDN se les califica de “partidos populares”

El propio PDN se arrojaría ser un partido de esa naturaleza y, por lo tanto capacitado para desempeñar ese papel en la transformación económica, social y política de Venezuela. En sus Tesis y programa lo dejaría asentado:

Por ser un partido popular – y no clasista -, el PDN abarca en sus filas a las mayorías del país, formadas no sólo por obreros y empleados, sino por todos los sectores venezolanos desvinculados de la oligarquía nacional y del capital extranjero. Es el nuestro un frente único de todos los hombres y mujeres venezolanos, realmente interesados en que la Nación conquiste su gran destino, se realice a sí misma y asegure a todos sus hijos bienestar social, libertades públicas e ilimitadas posibilidades de desarrollo cultural (Suárez, 1977, t. I, p. 263).

Lo importante, sin embargo, a destacar es que en el proyecto modernizador pedenista se plantea la imprescindible articulación de los sectores populares en el proceso de modernización de Venezuela no sólo como beneficiarios del mismo, sino como sujetos protagonistas de ese proceso mediante la organización de partidos políticos a través de los cuales se lograra su movilización y participación.

Precisamente por tal planteamiento de la presencia activa el pueblo como sujeto sobre el cual recae la responsabilidad de llevar adelante la transformación

de la sociedad venezolana, es por lo que algunos (España, 1989, p.90) han estimado a ese proyecto de "modernización populista"; en el que el proceso modernizador era concebido como un movimiento simultáneo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y no circunscrito únicamente a un grupo o minoría consciente de los pasos a dar.

Se trataba, por consiguiente, de una modernización que constituía un esfuerzo conjunto entre dirigentes y dirigidos, en el que la legitimación de las acciones de los primeros debían contar con el apoyo y la participación de los segundos organizados en partidos políticos representativos de los más amplios y variados intereses de los diversos sectores de la población venezolana. Por ello, el planteamiento en este proyecto modernizador de la necesidad de establecer la democracia como un orden real y efectivo a alcanzar de manera inmediata que permitiera la incorporación del pueblo a través del sufragio universal como única vía legítima de acceso al poder y a su ejercicio y, de allí, el que podamos calificarlo de "Democracia representativa ampliada".

En cuanto a la manera cómo debía llevarse a cabo la modernización de la sociedad venezolana; es decir, en cuanto a las prioridades que debían establecerse en la implementación de los aspectos económicos, sociales y políticos de esa modernización; para el proyecto pedenista el desarrollo de las acciones a seguir en estos aspectos debían abordarse paralela e imbricadamente, sin que hubiere separación entre los mismos o la concreción previa de uno de ellos como condición para alcanzar los otros.

Como se ha destacado anteriormente, en el orden económico, el planteamiento de la distribución de la renta petrolera, según este proyecto, debía estar dirigida no sólo a financiar las áreas productivas sino también a atender las necesidades materiales de la población. De tal forma que en este proyecto, el desarrollo de la política económica implicaba a la vez la realización de una política social que condujera al mejoramiento de las condiciones de vida de la población,

acompañado también del planteamiento de la apertura inmediata de los derechos políticos.

Se puede afirmar que la idea subyacente en este proyecto consistía en no sólo buscar el crecimiento económico y la productividad del país, sino que abarcaba una efectiva distribución de la riqueza y el mejoramiento de los niveles de vida de los distintos sectores de la población venezolana al tiempo que fuese el resultado de la más amplia participación de estos sectores.

Por consiguiente, se trataba de una modernización que implicaba el entendimiento de la democracia con “un contenido más profundo” como se afirmaba en las Tesis y programa presentado por el PDN; es decir, como la realización al mismo tiempo de un proceso de democratización económica, social y político.

Y cuando decimos que el PDN va a la conquista del poder para realizar un gobierno de tipo democrático, es dándole a este concepto un contenido más profundo del que le asigna el liberalismo clásico. Para nosotros el régimen democrático implica efectividad de las libertades públicas. Pero también y fundamentalmente, modificación profunda de la organización económica del país y democratización de la estructura de la economía nacional (Suárez, 1977, t. I, p. 267).

Como es sabido, el PDN (1939) constituyó el antecedente inmediato de Acción Democrática, partido fundado en septiembre de 1941, a raíz de la apertura democrática que se produjo en tiempos de Medina. Muchas de las tesis y propuestas modernizadoras expuestas por el PDN fueron asumidas por AD. Así en su programa se contemplaba la realización de medidas similares en los aspectos económicos, sociales y políticos (Magallanes, 1983).

Después del estudio pormenorizado de los dos proyectos modernizadores – el de López y Medina y el del PDN (1939) –, encontramos que ambos proyectos convergen en su naturaleza y objetivos; esto es, alcanzar la modernización de la sociedad venezolana en sus aspectos económicos, sociales y políticos. Así, en lo económico, como hemos visto también, perseguían la transformación capitalista

de la economía venezolana a través del desarrollo de una sólida base industrial que satisficiera un mercado interno; en lo social, el establecimiento de un orden acorde con esa transformación capitalista y en lo político, la instauración de la democracia como sistema de gobierno. Las coincidencias entre ambos proyectos abarcan igualmente el papel asignado al Estado venezolano: el de servir de promotor principal de esa modernización mediante el uso de la renta petrolera para financiar a la misma.

A pesar de tales coincidencias en lo que respecta a su naturaleza y objetivos, ambos proyectos divergen profundamente en la manera cómo debía llevarse a cabo la modernización del país; es decir, en la estrategia a seguir para viabilizarla en cuanto a las prioridades de los cursos de las acciones a implementarse en los aspectos económicos, sociales y políticos, así como también en los sujetos o agentes sobre los cuales recaería la responsabilidad de emprender la modernización.

En ese sentido, si bien en lo económico, se pretendía la transformación capitalista de la economía venezolana utilizando los recursos provenientes del petróleo, de acuerdo al proyecto lopecista-medinista, estos recursos debían ser destinados únicamente a su inversión en áreas productivas; es decir, solamente debían servir para la acumulación del capital. En cambio, para el proyecto modernizador alternativo o de los pedenistas, esos mismos recursos debían emplearse no sólo con ese único fin, sino también para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana, elevando de este modo su poder adquisitivo y creando así, un sólido mercado interno para la industrialización. De allí, en este proyecto, el planteamiento de la realización de una política social imbrincada al desarrollo de una política económica por la que se incorporara a los diversos sectores de la población en los beneficios de la renta petrolera.

A nivel político, si bien en ambos proyectos se plantea la necesidad de establecer un orden democrático; éste, sin embargo, en el proyecto lopecista-

medinista, constituye una meta a alcanzar luego de un proceso de maduración cívica de la población venezolana, de allí que en este proyecto, la apertura de sus derechos políticos no era visto como un imperativo para lograr la modernización. En cambio, para el proyecto pedenista, la democracia era considerada no sólo como la meta del proceso modernizador, sino que se le concebía como el único camino para efectuarla; en razón de lo cual, en este proyecto se propone su realización de manera inmediata y efectiva.

Tales diferencias sobre la democracia obedecen a las divergencias existentes entre ambos proyectos en relación a los sujetos o agentes que deben emprender la modernización. En el caso del proyecto lopecista-medinista, el sujeto de la modernización estaría constituido por una élite gobernante consciente de los pasos a dar para dirigir y orientar el proceso modernizador en tanto que para el proyecto pedenista era necesaria la articulación de las masas populares como sujetos directos para llevar adelante la modernización.

Finalmente, en relación a las prioridades a tener en cuenta en la realización de las acciones a seguir en los aspectos económicos, sociales y políticos; en el proyecto lopecista-medinista, la implementación del primero de estos aspectos constituía condición previa para el desarrollo de los otros dos. En cambio en el proyecto pedenista no se establecían esas prioridades o separaciones y se planteaba la imprescindible imbricación que debía existir entre ellos.

2.- La Iglesia Católica y la modernización (1936-45)

El debate sobre la modernización de la sociedad venezolana suscitado entre 1936 y 1945, se completa con el análisis que hagamos de la posición asumida por la Iglesia Católica al respecto durante esos años, la cual quedaría expresada en una "Carta Colectiva" emitida por el Episcopado venezolano en el mes de diciembre del primero de los años mencionados.

Si bien no se trató de la formulación de un proyecto modernizador específico para Venezuela como fue el caso de los proyectos anteriores, sin embargo, tal posición se corresponde con el proceso de renovación que a nivel mundial se había iniciado en el seno de la Iglesia Católica a partir de la celebración del Concilio Vaticano I y cuyos hitos fundamentales además de este concilio, lo constituyeron las Encíclicas "Rerum Novarum" de León XIII (15 de mayo de 1891) y "Quadragesimo Anno" de Pio XI (31 de mayo de 1931).

Con tal proceso de renovación, la Iglesia buscaba una reinterpretación de los valores del Evangelio a la luz de los acontecimientos económicos, sociales y políticos que conmocionaban al mundo en general pero, especialmente, en el ámbito europeo como consecuencia del desarrollo del industrialismo. En esa nueva visión aportada por la Iglesia y que algunos han denominado "Proyecto de Nueva Cristiandad", al mundo o a la sociedad humana se le reconoce validez y autonomía propia, pero a ellos había que infundir desde dentro los valores cristianos. En esa misma visión, Dios es concebido, ante todo, como creador del mundo y del hombre, el cual, a su vez, es considerado co-creador con Dios; el mundo, por tanto, al ser creado por Dios, es bueno y perfectible. El hombre al servicio de Dios y de ese mundo le corresponde la tarea de su perfeccionamiento, progreso y transformación de acuerdo a los principios del Evangelio cristiano (Cerpe, 1986).

De la anterior visión se derivó una nueva actitud de la Iglesia Católica hacia el mundo o la sociedad expresada en lo que se ha convenido en llamar "la Doctrina Social de la Iglesia" y por la cual, se trató de dar respuesta a los problemas económicos, sociales y políticos que aquejaban al hombre a fines del siglo XIX resultante del industrialismo moderno como se ha dicho.

La comprensión de esa posición asumida por la Iglesia Católica venezolana en el debate sobre la modernización conlleva a plantear brevemente la situación que esta institución presentaba a la muerte de Gómez.